

En Bartra, Armando., *Mesoamérica. Los ríos profundos: alternativas plebeyas al Plan Puebla-Panamá*. CDMX (México): Instituto Maya AC.

Sur: Megaplanes y utopías en la América equinoccial.

Bartra, Armando.

Cita:

Bartra, Armando (2001). *Sur: Megaplanes y utopías en la América equinoccial*. En Bartra, Armando. *Mesoamérica. Los ríos profundos: alternativas plebeyas al Plan Puebla-Panamá*. CDMX (México): Instituto Maya AC.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/armando.bartra/17>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/pCd2/bQO>



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. *Acta Académica* fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

SUR

Megaplanes y utopías en la América equinoccial

Armando Bartra

Extinguida la preponderancia del calor central y normalizados los climas del extremo norte y del extremo sur, a partir de los polos inhabitables, la existencia vegetativa progresa hacia la línea equinoccial. Bajo ésta quedan las zonas exuberantes por excelencia, donde los arbustos de otras se convierten en árboles, y el régimen, oscilando entre dos estaciones únicas, determina una uniformidad favorable a la evolución de los organismos simples, presos directamente en las variaciones del medio. La fatalidad astronómica de la inclinación de la eclíptica,... apenas se percibe en los parajes donde una sola montaña sintetiza, de la base a la cumbre, todos los climas del mundo.

Euclides da Cunha. Los Sertones.

I.-El fetichismo de la cartografía

Cable (del Primer Magistrado) a Ariel, su hijo, Embajador en Washington, disponiendo la inmediata compra de armamentos, parque, material logístico... procediéndose para ello, puesto que toda guerra es cara y el Tesoro Nacional andaba muy maltrecho, a la cesión a la United Fruit Co., de la zona bananera del Pacífico –operación demorada desde hacía demasiado tiempo por los peros, alegatos y objeciones, de catedráticos e intelectuales que no sabían sino hablar pendejadas, denunciando las apetencias –por Dios, inevitables, fatales querámoslo o no, por razones geográficas, por imperativos históricos- del imperialismo yanqui.

Alejo Carpentier. El recurso del método

Sur es el planeta profundo. Bautizado y acotado por un Norte expansivo y colonizador que de arranque definió el arriba y el abajo del mapamundi, Sur es un concepto geográfico pero también simbólico. Una alegoría que enlaza naturaleza pródiga con indigencia social, vegetación opulenta y lujuriosa con humanidad inerte, perezosa, incontinente, bárbara... Que asocia el sol canicular con el ánimo bullicioso, con la liberación de los impulsos reprimidos, con el lado femenino y desfajado, con la imaginación y el sueño, con el inconsciente, con la revolución, con la utopía.

El Sur americano y en particular su amplia franja equinoccial, es el subcontinente rural y campesino, la América de los indios y los negros, la periferia por antonomasia. Pese a que desde hace rato los presidentes de la República sueñan en inglés, el Sur todavía empieza en el río Bravo; pero el México equinoccial y Centroamérica son el sur del sur, el subdesarrollo subdesarrollado. Algunos piensan que se trata de un ámbito marginal, un arrabal incómodo y prescindible en un mundo cada vez más nortead y excluyente donde hasta la agricultura que cuenta es primermundista y el grueso del comercio fluye entre países industrializados. Y es que el contraste es dramático: Estados Unidos, con 260 millones de habitantes, produce el 77% del producto interno bruto continental, mientras que América Latina, con 500 millones, genera apenas el 33%. Dicho de otra manera: las dos terceras partes iberoamericanas de la población producimos sólo una tercera parte del PIB. Y no nos va tan mal, pues en el planeta todo tres cuartas partes de la población apenas generan la tercera parte del PIB.

Sin embargo, la presunción de que la cintura del continente es irrelevante para el capital no se sostiene. Además de agroexportadora de cultivos de plantación -el proverbial banano y sus semejantes-, la zona resultó escondrijo de recursos estratégicos: petróleo, gas natural y minerales no

metálicos, mantos de valiosa agua subterránea y ríos de alto potencial hidroeléctrico, bosques maderables pero también generadores de los llamados servicios ambientales, potencial pesquero de agua dulce y salada. Y por sobre todo biodiversidad: profusión de flora, fauna y microorganismos, con frecuencia endémicos, de interés creciente para la pujante ingeniería genética, y de importancia decisiva para el gran capital, dada la progresiva biologización de la actividad productiva. A esto hay que agregar que por naturaleza e historia, mesoamérica y el Caribe son ámbitos de privilegio para los servicios turísticos. Pero más allá de sus recursos naturales y culturales, por su ubicación geográfica el Istmo es insoslayable corredor del ingente comercio que fluye de la Costa Este de los Estados Unidos al Pacífico buscando rutas que esquiven Los Apalaches y Las Rocosas. Por último, subempleada y a la intemperie, la mano de obra mesoamericana resulta muy atractiva a un capital que segmenta y desperdiga por todo el planeta los procesos productivos.

La América de en medio ofrece una extensa y seductora variedad de posibles rentas: recursos escasos del subsuelo y de la biosfera; clima, paisaje, cultura e historia comerciables; ubicación estratégica para el mercadeo; sobrepoblación relativa que abarata el trabajo, y por último, que no al final, gobiernos solícitos. Y como al capital le interesan las rentas de monopolio, más que las posibilidades de inversión competitiva, es previsible que mesoamérica devenga, otra vez, escenario de pugnas entre los piratas y corsarios del gran dinero. Algunos dirán que esto es mejor que el éxodo hacia el norte derivado de la insuficiencia de inversiones y empleos. Pero no, porque la nueva colonización amenaza con ser tan expoliadora como las anteriores. Sin duda la región necesita desarrollo, lo que no se logra incorporándola sin más a la globalización realmente existente.

Si queremos un futuro habitable para mesoamérica, de arranque necesitamos repensar la relación entre el Norte y el Sur, poner en cuestión la arcaica metáfora del centro y la periferia. El modelo concéntrico del mundo, que concibe el progreso planetario como obra de sucesivas oleadas civilizatorias provenientes de unos cuantos polos metropolitanos, está en crisis. La modernidad que queremos no es la que se difunde desde un centro, como las hondas que provoca la caída de una piedra en el estanque. Proverbial ámbito de descubrimiento y colonización, el Sur viene de regreso. Y no se trata sólo del multitudinario éxodo sudaca que fluye a contrapelo de las viejas migraciones, se trata también de la colonización de los imaginarios nortños por la cultura tercermundista, del cerco espiritual a las metrópolis por un Sur que exporta paradigmas y utopías como antes exportaba grana cochinilla y maderas preciosas.

Pero tampoco se trata de invertir la metáfora y voltear el mapamundi. El reto de la globalización alternativa es erradicar las hegemonías y el pensamiento único; es concebir y edificar un mundo descentrado o multicéntrico, al modo del estanque acribillado por la lluvia donde se

cruzan incontables ondulaciones. Y para transformar la globalidad hegemónica en una red de redes es necesario subvertir ciertas ideas rancias. Por ejemplo, la de que así como hay hombres centrales y modernos, otros somos periféricos y anacrónicos, es decir que el mundo se divide en los privilegiados del Norte que viven en el presente y los desahuciados del Sur que habitamos el pasado; cuando lo cierto es que en el tiempo de la comunicación instantánea y los éxodos planetarios, todos somos rigurosamente contemporáneos. Tampoco se sostiene el modelo social dualista, empleado como cortada para desafanarse de la miseria extramuros; en tiempos de mundialización, las abismales desigualdades no pueden endosarse a un más allá premoderno, son desgarramientos entrañables, intrínsecos al mercantilismo realmente existente; en la casa de cristal del mundo globalizado el adentro y el afuera pierden sentido, y si no hay exterioridad tampoco reservaciones preburguesas ni periferias subcapitalistas. Hoy por hoy, todos somos simultáneos y centrales, contemporáneos rigurosos que entramos al nuevo milenio el mismo día y caminando juntos. En el mundo de la absoluta interioridad o nos salvamos todos o no se salva ni dios. Otra idea a desechar es el socorrido prejuicio de que la economía es dura y la sociedad blanda, de modo que las aspiraciones humanas deben plegarse al inapelable fallo del mercado. Es más, piensan algunos, si el mercado ha de proveer, las aspiraciones humanas salen sobrando. Lo cierto es que en la centuria pasada imperó la desalmada economía, nos toca a nosotros domesticar producción y circulación, haciendo del XXI el siglo de la sociedad.

Para jubilar estos dogmas no dispongo de acabados paradigmas alternos ni sistemas conceptuales definitivos, si acaso algunas intuiciones provisorias. Espero que basten para el presente trabajo: un ensayo, que pretende confrontar la nueva colonización, agazapada tras megaproyectos como el Plan Puebla Panamá (PPP) y su porción mexicana, el Plan Sur-Sureste (PSS), con las experiencias autonómicas y autogestionarias desarrolladas en la región; que busca contraponer el mundo de arriba con el mundo de abajo, las pesadillas norteñas con los sueños guajiros, la globalidad hegemónica con las tercas utopías tropicales. Afortunadamente no se trata de escenificar un choque de fundamentalismos, no pretendo cuestionar el integrismo neoliberal con ideas de otro signo pero igualmente dogmáticas. Mi estrategia consiste en confrontar el modelo globalizador dominante, con opciones edificadas por los propios productores. Porque el mentís más categórico a los profetas del libre mercado, no son tanto los contraproyectos de escritorio como las alternativas societarias hechas a mano. Alternativas que están en todas partes, pero en el caso mexicano han tenido un despliegue excepcional en el movimiento autonómico indígena y en las organizaciones de los pequeños productores, particularmente los cosechadores de café. Así, en los últimos capítulos intentaré demostrar que emancipadas del yugo externo y de sus propios demonios, las comunidades indígenas prefiguran formas de convivencia solidarias habitables por todos, y que

las redes de modestos huerteros, que a veces se extienden hasta los consumidores primermundistas, son laboratorios de economía moral. La hipótesis de trabajo es que la construcción social de la experiencia, y en particular la invención práctica y colectiva de modelos virtuosos de producción y circulación, es el terreno donde las ideas neoliberales pueden ser derrotadas, pero también el ámbito donde se está conformando la fuerza social capaz de frenar la globalidad excluyente y construir un orden habitable.

II.- Nueva colonización

*Recias líneas irradiaban desde allí en todas direcciones a través de los trópicos...Líneas que significaban su influencia... Los promotores de las Compañías suelen estar dotados de gran imaginación... Aparecieron ahí ingenieros; lleváronse trabajadores indios...La cosa había llegado, al fin, y cualquiera podía ver ya claramente las consecuencias que traería...
-¡Eso es lo que llaman desarrollo... y a nosotros que nos parta un rayo!*

Joseph Conrad. Victoria

Mesoamérica.com

Las grandes áreas del continente están acotadas por acuerdos económicos, cartas de garantías para el capital que intensifican las interdependencias financieras: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Mercosur, el Pacto Andino y en el futuro la Area de Libre Comercio de las Américas, que comenzó a discutirse en 1994 y se ha fijado como plazo de formalización el 2005. En este contexto, los tratados entre países centroamericanos, como los que México firmó con Costa Rica (1995) y con Nicaragua (1997), el que se acordó entre México, Guatemala, El Salvador y Honduras (2000), y los que negocia México con Belice y con Panamá, son asuntos menores y subordinados a la lógica del inminente ALCA. En cuanto al PPP y su parte mexicana el PSS, pese a no ser convenios comerciales sino simples planes de desarrollo con óptica regional y transfronteriza en vez de sectorial, también son relevantes pues por su ubicación ístmica y sus recursos bióticos, hídricos y petroleros, la zona es de importancia estratégica. Pero para quienes asumimos el desafío en perspectiva no gubernamental, son consideraciones sociopolíticas

las que hacen promisorias a la región, pues Centroamérica ha sido y es un área de intensa experimentación social, y sus pueblos comparten historia, cultura e identidad en mayor medida que los de otros ámbitos americanos. Por ello, más allá de los megaproyectos cupulares, es posible y necesario pensar en una alianza social mesoamericana, una convergencia multinacional desde abajo que dé respuesta a los retos de la globalización perversa. Esta es la apuesta del presente ensayo.

La región está formada por ciento dos millones de hectáreas, donde habitan sesenta y cuatro millones de personas, de las cuales casi el la mitad vive en el campo, alrededor del 40% trabaja en la agricultura y el 18% es indígena. Más del sesenta por ciento de los mesoamericanos son pobres. Miserables en medio de una alucinante riqueza biológica: 1 797 especies de mamíferos, 4 153 de aves, 1 882 de reptiles, 944 de anfibios, 1 132 de peces, 75 861 de plantas, e incontables microorganismos, configuran un opulento corredor biológico en proceso de formalización internacional. Por el momento, más del diez por ciento de la superficie, 11.9 millones de hectáreas, conforman 366 Áreas Protegidas, superficie de la cual el 45% corresponde a México y el 55 al resto de los países centroamericanos. Sin embargo tanto la flora como la fauna son depredadas para la venta ilegal de mamíferos y reptiles -vivos y pieles- así como de plantas, sobre todo orquídeas. El bosque se pierde aceleradamente: 11 millones de hectáreas entre 1992 y 1996. Deforestación que es particularmente grave en la porción mexicana: en 1960 la selva Lacandona tenía 1.5 millones de hectáreas arboladas y 12 mil habitantes, hoy tiene 325 mil hectáreas y 215 mil habitantes. Esta riqueza biológica es posible, entre otras cosas, por la abundancia de agua dulce, que en si misma es un recurso estratégico: en Nicaragua, Costa Rica y Panamá las precipitaciones son altísimas y hay extensos acuíferos subterráneos: en metros cúbicos de agua por habitante, Belice tiene 66 470, Panamá 51 616, Nicaragua 32 484, Costa Rica 27 936, Honduras 14 818, Guatemala 11 805, México 4 136 y El Salvador 2 820.

En lo tocante a la actividad económica extrovertida, si ponemos aparte el petróleo mexicano y la producción industrial en estados como Puebla y en menor medida en Costa Rica, la zona es abrumadoramente agroexportadora. Renglón donde destacan el café, que prácticamente todos los países de ahí producen; el azúcar, que es importante para México, Guatemala, Belice, Honduras y Nicaragua; el plátano, relevante para Costa Rica y México; y la carne, que comercializan Panamá, Costa Rica, Nicaragua y México. Las exportaciones de pescados y mariscos son significativas para Honduras, Nicaragua y Panamá. Recientemente se han establecido en mesoamérica vertiginosas plantaciones forestales; México sólo dispone de 60 700 hectáreas de bosques artificiales, mientras que la mayor parte, 256 650, corresponden al resto de los países centroamericanos, particularmente

a Costa Rica y Guatemala. Otra actividad importante volcada al exterior es el turismo, pues llegan a la región alrededor de 5 millones de visitantes al año. Sin embargo, la presunta ventaja comparativa de zona es su maldición, pues en los últimos años han caído los precios de los productos agrícolas tropicales, ocasionando un déficit de 23 600 millones de dólares, apenas compensado por las inversiones extranjeras directas y los créditos.

En cuanto a la economía introvertida, los mesoamericanos somos hombres de maíz. Cultivo ancestral que se practica sobre cinco millones trescientas mil hectáreas, donde anualmente se cosechan unos diez millones de toneladas del grano, que con algo más de medio millón de toneladas de frijol, constituyen nuestra dieta básica. Aun así, los pueblos de la América de en medio viven en vilo, al borde del desastre: cuando no caen los precios del café, el azúcar o el banano, sofocan a la región sequías como la de 1994 o la sacuden huracanes con nombres en inglés como Lily, George y Mitch.

Aunque también entre los mesoamericanos hay clases, y la relación económica entre México y los países de Centroamérica es profundamente asimétrica: por cada dólar en mercancías que las siete economías ístmicas exportan a México, importan bienes de ese país por cuatro dólares. Así, en 2000 las exportaciones mexicanas a Centroamérica fueron de 1 690 millones de dólares y las importaciones de sólo 453, arrojando un superávit de 1 131 millones de dólares a favor del primero. Por otra parte, para México esta relación comercial es poco relevante, pues por cada dólar de exportaciones que envía a los siete del sur, factura 11 a los dos vecinos del norte, y en cuanto a las importaciones mexicanas, el porcentaje de origen centroamericano es insignificante. Las economías de los países pobres miran hacia arriba y la articulación entre Mesoamérica y Norteamérica, con México como gozne, confirma la aseveración. Pero si México se mundializa económicamente hacia el norte, socialmente está englobado en el sur.

Conforme nos alejamos de Estados Unidos, adentrándonos en la América equinoccial, aumenta la temperatura, bulle la vegetación, menudean los baches y se encona la pobreza. Un buen indicador de este descenso en los infiernos sociales es el jornal. Un hombre no vale lo mismo en el Norte que en el Sur. El salario mínimo por hora en EEUU es de 5.15 dólares, mientras que en México es de 35 centavos de dólar, catorce veces menos, aunque en el caso de los sueldos industriales la diferencia es de *solamente* el mil por ciento. Pero estas son engañosas medias nacionales, y el sur es sobre todo campo, ámbito donde las remuneraciones son aun más bajas pues el 70% de los ocupados gana menos del salario mínimo. El ejemplo más dramático de salarios diferenciales lo encontramos en las maquiladoras: trabajar en una fábrica de capital, maquinaria y materia prima estadounidenses, y cuya producción se destina a EEUU, pero que está ubicada del lado sur de la frontera, significa ganar en pesos diez veces menos que si se trabajara en *el gabacho*;

pero en las maquiladoras del centro del país pagan 10% menos que en las del norte, en las del sureste mexicano 40% menos, y en las de Centroamérica, menos aun, pues hay que competir con los 25 centavos de dólar la hora que acepta la mano de obra china. Y si los salarios bajan con la latitud, los trabajadores remontan el continente rumbo al norte. Es la ley del mercado, que no puede ser bloqueada por la cruenta Línea Maginot en que se ha transformado la frontera entre México y los Estados Unidos.

Pero aun entre sureños hay diferencias. En cuanto a la edad, a las nuevas generaciones les toca la peor parte: en México y el resto de Centroamérica, los jóvenes son el 20% de la población, pero más de la mitad de los desempleados. En lo tocante al género, a las mujeres les va como en feria, pues la proverbial doble jornada se está volviendo triple: los hombres del campo emigran en mayor proporción (15% más) y se feminiza el agro. Así, en México hay 600 mil ejidatarias, cuando en 1970 eran sólo 31 mil, y de los 11 millones de campesinas, todas cumplen su jornada doméstica, pero la mayoría labora también al jornal, en el comercio, en la parcela o en la artesanía, en jornadas de hasta 18 horas; y cuando la ocupación es retribuida, a ellas se les paga 25% menos que a los varones, por igual trabajo. Si de etnia se trata, la Encuesta Nacional de Empleo nos muestra que los indios se agolpan en la franja más depauperada del espectro social: 95% son pobres y 80% indigentes, además el 93% de los empleados gana menos de dos salarios mínimos, pero aun en iguales condiciones los indios sufren más que los mestizos, pues a la subestimación económica se agrega la discriminación. La pobreza está generalizada, pero el sur es más pobre que el norte, el campo más que la ciudad, los indios más que los mestizos, las mujeres más que los hombres y los jóvenes más que los adultos. Y como la minusvalía es acumulativa, las mujeres jóvenes de condición indígena ocupan el sótano social.

La pobreza mesoamericana es del bolsillo pero también de herramientas espirituales. En los estados mexicanos comprendidos en el PPP el analfabetismo es de 17%, un 10% por arriba del país en su conjunto, mientras que en Guatemala los que no saben leer ni escribir representan el 45% de la población, en Nicaragua son el 33%, en El Salvador 25%.

La gran marcha al Norte dramatiza esta situación, pues México y Centroamérica comparten la condición de expulsores de fuerza de trabajo y generan más de la mitad del total de migrantes indocumentados en EEUU. Así, de cada cien fuereños sin papeles, 70 son latinos, y de ellos 40 son mexicanos, 10 salvadoreños, 4 guatemaltecos, 2 nicaragüenses y 2 hondureños. Ahí sufren vejaciones todos por igual, pero también el curso latino de su éxodo es un infierno. El tratamiento que reciben en nuestro país los migrantes sudacas documenta el verdadero talante de las autoridades mexicanas, más allá de los Acuerdos de Tuxtla y las promesas del PPP. Con la diáspora en tránsito, el gobierno de México no actúa como hermano mayor de los centroamericanos, sino como

cancerbero de los estadounidenses. Malos modos aparte, en 1995 deportó a 105 932, en 1996 a 110 484, en 1997 a 86 973, en 1998 a 118 786, en 1999 a 131 486, en 2000 a 168 755 y en los primeros meses del 2000 la migra morena deportó a casi 30 000. La mayoría de los indocumentados interceptados interceptados aquí por la migra morena son guatemaltecos, seguidos por los hondureños y los de El Salvador.

Haciendo planes

Sin duda a la región ya le anda por el desarrollo, y si el PPP hubiera de traerlo sería bienvenido. Por desgracia los planes gubernamentales para el Sur son una combinación de demagogia, contrainsurgencia y deseos de una nueva colonización puramente empresarial. La ideología que subyace en los proyectos se balconea desde su torpe denominación. La iniciativa que el presidente de México bautizó Puebla -Panamá, por ejemplo, debiera llamarse México-Panamá, o en todo caso Puebla -Darién, pues esta última es la provincia más sureña de Panamá; a menos que el señor Fox suponga que el estatuto de los países Centroamericanos es el mismo que el de los estados de la República Mexicana. En cuanto a la porción mexicana del proyecto, la consigna que lo promueve no puede ser más reveladora. Proclamar la Marcha al Sur-Sureste, es sugerir que los guerrerenses y oaxaqueños se tiren al mar y los chiapanecos y tabasqueños se vayan a Guatemala, aunque más bien es un cínico llamado a que los norteños organicen la nueva colonización del trópico. Y la designación está norteada hasta en las latitudes, pues cuando el proyecto habla del Sureste obviamente busca incluir la península de Yucatán, pero resulta que los habitantes de Mérida son unos 150 kilómetros más norteños que los chilangos, y aunque le duela al presidente, el estado de Yucatán es tan Centro-Norte como el de Guanajuato.

Denominaciones y consignas aparte, las intenciones del PPP han comenzado a cobrar forma, sobre todo en lo tocante a su porción mexicana. Florencio Salazar, guerrerense que militó en el PRI hasta hace un par de años y que se trasplantó al PAN cuando este partido iba de gane, es el responsable del PSS, y en entrevista publicada el 16 de Abril de 2001, ventanea los motivos del proyecto:

“...no podemos tener una región tan atrasada que tarde o temprano represente un amago serio a la integración nacional... Quién está ...abandonado, no tiene por que sentir una adhesión al país... No debe haber motivo alguno para que alguien no se sienta suficientemente mexicano”.

Es decir, que los del “verdadero” México, que es el del centro y el norte, temen que los del llamado Sur-sureste no tengan “adhesión al país”, les preocupa que el suriano “no se sienta suficientemente mexicano”. Sin duda el regionalismo discriminador de raigambre panista es contagioso, pues en boca de un guerrerense maromero, los norteños, que ya secuestraron a la

nación, ahora le tienden un lazo a los sudacas, no sea que se les ocurra “algún amago serio a la integración nacional”. Cómo pensar que son los pobres del Sur quienes ponen en riesgo a la mexicanidad, cuando dos de nuestros últimos presidentes, el uno con posgrado en Harvard y el otro en Yale, pasaron sin conflicto de interés de conducir los destinos de la nación a conducir los destinos de corporaciones estadounidenses como Dow Jones & Company Inc., Salinas, y Procter and Gamble y Union Pacific, Zedillo. Así pues, si hubiera que preocuparse por falta de “adhesión”, y porque alguno “no se sienta suficientemente mexicano”, sería debido al comportamiento de los sectores más transnacionalizados de nuestra anglófona Iniciativa Privada y tecnócratas que la acompañan.

El otro prejuicio subyacente en el PPP y el PSS, es el que ve en la convención geográfica que nos divide en una porción norteña y una sureña, la expresión de un dualismo socioeconómico y hasta civilizatorio, que fractura a la nación entre los ganadores de arriba y los perdedores de abajo. En la ceremonia de presentación del gabinete de Vicente Fox, Florencio Salazar dijo: “Una simple mirada de lo que somos, evidencia dos Méxicos: el que mira, y participa, de los Estados Unidos, y el que está atado a su atraso, junto con nuestros vecinos del sur”.

Para discutir en serio estos planes hay que empezar por definir el perfil de la nación. En un sentido profundo, no puramente geográfico, México, todo México, es Sur, y culturalmente su identidad gravita sobre la porción equinoccial de su territorio. La articulación nacional, que sin duda nos hace falta, no puede consistir, como el viejo indigenismo, en una pretendida integración del Sur demorado y marginal, a la presunta modernidad norteña. Y tampoco a la inversa, claro. Necesitamos una integración nacional en la que de verdad quepamos todos; una integración de las clases, los géneros, las etnias, las regiones y los sectores en plano de igualdad; una integración económica, pero también social y cultural; una integración que respete y promueva la diversidad virtuosa. Y con base en esta integración habremos de profundizar nuestra inserción en el mundo. Sin olvidar que nuestras iniciativas globalizadoras estratégicas debieran privilegiar el Sur sobre el Norte; promover alianzas y acuerdos con nuestros semejantes, en vistas a fortalecer la posición sureña en el asimétrico y norteado concierto de las naciones. Que no se entienda mal. No quiero decir con esto que debemos renunciar a los acuerdos con países y bloques más desarrollados, o cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Afirmo, si, que en los acuerdos debemos asumir nuestra condición sureña y negociar el reconocimiento de las asimetrías. No hacerlo condujo a que el TLC fuera profundamente injusto, al no prever tratamientos, recursos y acciones destinados a reducir la disparidad, promoviendo el desarrollo del socio más débil. Fondos y mecanismos compensatorios que sí fueron contemplados en la conformación de la Unión

Europea. Pero el problema de fondo es que los tratados comerciales no son más que las patentes de curso que demanda el gran capital, cartas magnas supranacionales repletas de garantías para los inversionistas pero omisas en cuanto a los derechos laborales, migratorios y ambientales. Sólo la presión desde abajo puede incorporar la agenda social en los tratados mercantiles, y mientras esto no suceda, los programas nacionales o multinacionales que se encuadran dentro de los convenios, serán simples subastas de nuestros recursos humanos y naturales; llamados a una nueva colonización, tan salvaje como las anteriores.

Más allá de la visión norteña, en el fondo contrainsurgente, que justifica el PSS por los riesgos sociales y políticos que representa la pobreza, otra parte del discurso, la más lucidora, maneja el desarrollo del Sur como combate a la marginación e impulso a la equidad, a partir de las potencialidades locales y los proyectos de sus actores. Lamentablemente esto son únicamente palabras, la vertiente dura del proyecto consiste en venderle la región al gran capital trasnacional, propiciando la transacción mediante facilidades normativas, exenciones fiscales y dotación de infraestructura financiada con recursos públicos; “estímulos” que le permitan al gran dinero potenciar las ventajas comparativas de la zona, entendidas como recursos excepcionales y privatizables, fuente de cuantiosas rentas. En concreto, se trata de promover maquiladoras, plantaciones especializadas y tecnificadas, megaproyectos turísticos y servicios al comercio, como el corredor transístmico de Tehuantepec.

Pudiera pensarse que la llegada de inversiones y el impulso al desarrollo social, son caras de una misma moneda. La realidad es que incorporar el Sur a la globalización desmecatada y combatir la pobreza y la marginación, son proyectos distintos, posiblemente contrapuestos. Y no lo digo yo, o algún otro globalifóbico, lo dice Santiago Levy, actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social, y uno de los cerebros de las reformas neoliberales de los noventa, quién en el estudio *El sur también existe: un ensayo sobre desarrollo regional de México*, afirma categóricamente que “...el diseño de políticas públicas para el sureste debe separar los objetivos de combate a la pobreza de los de desarrollo regional”.

Lo que subyace en el aserto es el debate en torno a la relación entre las políticas de impulso al crecimiento económico y las que promueven el bienestar social, discusión de fondo donde se confrontan dos modelos antagónicos de desarrollo. La pertinencia de traer a colación esta polémica, proviene no sólo de que el adalid de la separación de objetivos sociales y económicos es autor de una propuesta sobre el desarrollo de Chiapas y el sureste, y uno de los miembros destacados del antiguo régimen que fueron recuperados por el gobierno del cambio, sino también de que los argumentos con que el actual gobierno sustentó ante los legisladores la solicitud presupuestal para el PSS, son curiosamente parecidos a los del mencionado ensayo. Y por si fuera poco, resulta que

Levy era el Subsecretario de Egresos saliente cuando esta solicitud fue elaborada por el Equipo de Transición. En la *Exposición de motivos del Proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el año fiscal 2001*, se lee:

“Para asegurar que los frutos de la globalización lleguen a todos los rincones de México, la presente administración ha diseñado un programa estratégico de largo alcance que tiene como objetivo promover el cambio estructural en los estados del Sur-sureste. Dicho programa está enmarcado en un plan de mayor envergadura cuyo objetivo es *eliminar los obstáculos que han inhibido su potencial productivo*, y con ello *impulsar su desarrollo* y favorecer su integración con los mercados nacionales e internacionales, no solo con América del norte sino también con los países Centroamericanos. Lo anterior permitirá a la región aprovechar las oportunidades que ofrecen los tratados internacionales, que en materia de comercio e inversión, han sido negociados recientemente” (cursivas nuestras)

Por su parte Levy escribe:

“El diagnóstico presentado... sugiere... que las políticas públicas han *reprimido el desarrollo productivo* del sureste al anular, en gran medida, sus ventajas comparativas. Por ello, argumentamos que existe un amplio espacio para diseñar una política que *libere el potencial productivo* de la región” (cursivas nuestras)

Las dos formulaciones comparten la idea de que el potencial productivo del sureste a sido *inhibido* o *reprimido* y que hay que *liberar* o *eliminar los obstáculos* que han ocasionado el bloqueo. Levy es explícito en la enumeración de dichos obstáculos:

“Exclusividad del Estado en actividades estratégicas, particularmente en electricidad, gas y petroquímica...”

“...el régimen de derechos de propiedad sobre los hidrocarburos y el agua también han afectado al sureste...región...muy bien dotada de petróleo y gas natural (Chiapas, Campeche Tabasco) y cursos de agua... (Chiapas)”

“...la larga duración del reparto agrario representó un desincentivo al desarrollo agrícola en nuestro país...en especial en el sureste...”

“...restricciones derivadas del Artículo 27 constitucional vigentes hasta 1994 a poseer o arrendar grandes extensiones de tierras... fueron especialmente distorsionantes en el sureste, región que tiene condiciones adecuadas para productos cuyo cultivo más eficiente se da en el contexto de una agricultura de plantación; es decir una agricultura caracterizada por amplias extensiones donde se cultiva, en forma tecnificada, un único producto de tipo perenne ...: café, plátano, azúcar, palma africana y productos maderables, entre otros... agricultura de plantación ...(que)... se desarrolla mejor por parte de agentes económicos dotados de amplios recursos financieros...”

Más claro imposible. Si la propiedad de la nación sobre la tierra, el agua y los recursos del subsuelo, así como la exclusividad del Estado en la extracción del petróleo, la petroquímica básica y la distribución y comercialización de electricidad, son, junto con la prolongada reforma agraria y la economía parcelaria, los causantes del atraso de la región. Si –como escribe Levy- ”... las políticas públicas han reprimido el desarrollo productivo del sureste al anular, en gran medida sus ventajas comparativas...”, el remedio está en eliminar los estorbos constitucionales restantes, construir por cuenta del erario público la infraestructura necesaria y limpiarse bien las uñas para servirle la mesa al exigente capital.

En esencia se trata de venderle el sureste al gran dinero, con argumentos muy parecidos a los que ya se usaron en otros tiempos. En un folleto en inglés destinado a potenciales inversionistas leemos:

MÉXICO AGRÍCOLA

...maravillosas posibilidades para los agricultores americanos y europeos en la república mexicana.

MÉXICO ATRACTIVO PARA EL CAPITAL

Más de dos mil millones de dólares en recursos foráneos, muestran que el gobierno es considerado estable, las leyes justas y las oportunidades inigualables... En muchos grandes negocios, los capitales norteamericanos, ingleses y alemanes trabajan codo con codo... y el capital mexicano se entrevera libremente... Esta labor de transformación se extiende a lo largo y a lo ancho de la tierra de los aztecas... Lo que está sucediendo en México gracias... a las inversiones foráneas es poco menos que un milagro...

El folleto, titulado Agricultural Mexico, se publicó en 1909, y era parte de la campaña con que el gobierno de Porfirio Díaz promovía la colonización del sureste por compañías trasnacionales, ofreciendo libre acceso a la tierra, exención de impuestos, nuevas vías de comunicación y estabilidad social. La campaña tuvo éxito, y los trópicos se llenaron de plantaciones y monterías agroexportadoras norteamericanas, inglesas, alemanas, francesas, holandesas, españolas, belgas... que en ocasiones tenían como socios menores a empresarios y finqueros locales. En términos de crecimiento económico se lograron los objetivos, y si en 1878 las dos terceras partes de las exportaciones mexicanas eran metales preciosos, para 1910 el oro y la plata constituían únicamente el 46% de lo exportado y el 40% del total estaba formado por materias primas como el henequén, el hule, el café, además de metales industriales, petróleo, etc. Lamentablemente, pese al milagro porfirista, ese mismo año estalló la revolución. Y es que la modernidad, entendida como captura de inversiones extranjeras, expansión económica e inserción en el mercado mundial, iba acompañada

del saqueo irresponsable de los recursos naturales y de la profundización de las injusticias sociales. El moderno México agroexportador era también el México bárbaro.

Algunos piensan que el PPP es una amenaza y otros creen que es también una oportunidad. En todo caso, si no queremos que el ciclo de la colonización salvaje se repita, debemos asumir que la inversión es necesaria para el desarrollo pero no suficiente, y que atraer capital a como de lugar, solapando su proclividad depredadora de hombres y recursos naturales, no genera bienestar social sino todo lo contrario. Pero los nuevos promotores de la modernidad no sólo no aprenden de la historia, ahora tratan de sustentar la política de captar ahorro externo a toda costa, con la peregrina teoría de que una cosa es desarrollo económico y otra muy diferente desarrollo social.

Así, Santiago Levy sostiene que respecto de la problemática del sureste hay “dos puntos de vista”, el que enfoca “sus condiciones de pobreza y marginación” y el que considera la “producción”, y que entre ellos la conexión “dista de ser total”, porque si en una región no hay actividades que generen ingreso, la gente se va y con ella emigra la pobreza; por otra parte, generar “polos de desarrollo” en una zona marginada, atrae trabajadores calificados de todo el país, pero no emplea satisfactoriamente a los locales. Entonces, dado que “la creación de un polo de desarrollo en una región atrasada no resuelve necesariamente sus problemas de pobreza..., el diseño de políticas públicas para el sureste debe separar los objetivos de combate a la pobreza de los de desarrollo regional, debido a que los instrumentos a utilizar en cada caso no son los mismos, al menos en el corto plazo”. Más adelante reitera: “...impulsar el desarrollo de Chiapas y del Sureste en general, debe separar los objetivos de combate a la pobreza de los del desarrollo regional...”, y explica: “Para combatir la pobreza se cuenta con los instrumentos de política social... (en cambio el)... diagnóstico presentado ...sugiere... que las políticas públicas ha reprimido el desarrollo productivo del sureste al anular, en gran medida, sus ventajas comparativas. Por ello, argumentamos que existe un amplio espacio para diseñar una política que libere el potencial productivo de la región”

Las “inversiones en capital humano” -que en realidad son gasto asistencial focalizado e individualista, como el Progresá del que Levy es inspirador- son los “instrumentos de política social” con que ya “se cuenta”; de modo que ahora lo que falta es promover la inversión desmecatada de capital, sin inútiles y molestas consideraciones societarias.

A esta posición se contraponen los planeamientos del senador del PRI, Carlos Rojas, que en la Exposición de motivos de su Iniciativa del Sur, enfocada a Chiapas, Oaxaca y Guerrero, argumenta: “México sigue siendo... ejemplo... de la incapacidad para articular plenamente la política económica y el desarrollo social.”, y más adelante dice que “se requiere una estrategia en la que el desarrollo regional sea concebido como un proceso complejo, en contraste con otros

enfoques que centran sus acciones en aspectos únicos como la infraestructura o la sola asistencia social”. La confrontación de Rojas y Levy es sintomática, pues el primero estuvo encargado de la política social en los últimos años del gobierno de Salinas y los primeros del de Zedillo, mientras que el segundo fue el responsable zedillista de autorizar el gasto, entre otros el social, desde la Subsecretaría de Egresos de Hacienda. Cuadros destacados del viejo régimen, Rojas y Levy representan las dos tendencias que coexistieron en los últimos años del sistema de partido de Estado: el clientelismo social y la conversión neoliberal de la economía. Conceptualmente Rojas tiene razón cuando propone la integralidad del desarrollo regional y cuestiona los enfoques que separan la promoción de la producción mediante infraestructura, del gasto social asistencialista. El problema es que el hoy senador sigue identificado con la visión clientelar de las políticas públicas, es principal responsable de la incorporación del tristemente famoso Apartado B del Artículo 2 constitucional de la Ley indígena pergeñada por el Senado, que busca cambiar los derechos escamoteados a los pueblos originarios por obligaciones asistenciales del Estado, y recientemente ha defendido la continuidad en Chiapas del Programa Cañadas, del que fue autor, cuando las organizaciones sociales de la zona y el propio gobierno estatal, cuestionan su carácter contrainsurgente y efectos divisionistas. En cuanto a Levy, resulta sintomático que siendo preclaro representante de la globalifílica “generación del cambio”, de las “alimañas, víboras prietas y tepocatas” responsables del desastre social de las últimas dos décadas, haya sido recuperado por el gobierno de Vicente Fox, no sólo como director del IMSS, sino como ideólogo de la nueva colonización del sureste. Así, Santiago Levy resulta un brillante tecnócrata de carrera, capaz de servir con prestancia a gobiernos de distinto signo político, con tal de que mantengan las mismas premisas económicas neoliberales.

El documento difundido en marzo de 2001 con que el PPP hace su presentación formal, es un claro ejemplo de doble discurso. En el llamado *Documento Base* -texto inconsistente y desbalagado como pocos- coexisten dos planteos: el desarrollo social paternalista y clientelar, sustentado en programas de servicios y asistencia, y la colonización salvaje con capital trasnacional, propiciada por el Estado mediante garantías, infraestructura y facilidades. El primero se origina en la vertiente populista y pronasolera del viejo régimen, retomada por el foxismo mediante Florencio Salazar, y por el PAN con la alianza de los senadores Carlos Rojas y Diego Fernández en torno a la ley indígena. El segundo proviene también del viejo régimen, pero de la tecnocracia neoliberal, recuperada por el foxismo a través del secretario de Hacienda Francisco Gil y del director del IMSS Santiago Levy.

Hemos dicho ya que el núcleo duro de la propuesta es la nueva colonización, pero esto no significa que la faceta de desarrollo contrainsurgente y control social, sea una simple cortina de

humo. El *Documento Base* del PPP identifica como *debilidades* de la zona: “Inversión extranjera directa discontinua y con un horizonte de corto plazo, por la percepción de un alto riesgo-región, tanto físico como político”, y como *amenazas*: “Desigualdad creciente entre pobres y ricos..., con el consecuente incremento de tensión social”. De ahí que, dado que el capital exige garantías, sea necesario desarrollar una política social de contrainsurgencia y control, que permita manejar la “tensión social” y reduzca los riesgos políticos.

Sin embargo el PPP apuesta centralmente al crecimiento económico extrovertido, con gasto social de contención, y para este crecimiento confía en el capital y en particular en el capital extranjero. Así, el mencionado documento está lleno de promesas al gran dinero: “construcción de parques industriales” y todo tipo de “infraestructura productiva”, por cuenta del gasto público, “incentivos fiscales”, “deductibilidad inmediata de las nuevas inversiones”, “simplificación de trámites”, “desregulación federal” y en general disposición a “eliminar obstáculos regulatorios”, “seguridad, estabilidad y certidumbre jurídica”, etc. Porque a falta de suficiente ahorro interno, el ahorro externo está muy peleado, y es sabido que lo único más asustadizo que un dólar son dos dólares. En cambio, prácticamente no hay una sola referencia al mercado nacional; y fuera de los cuadros estadísticos y una mención en la página 28, no se habla del sector social integrado por pequeños y medianos productores, multitudinario contingente que productivamente es decisivo en granos básicos pero también en cultivos comerciales como café, caña, cacao, copra y cítricos. Y es en estos énfasis y en estas omisiones donde el documento muestra el cobre.

Ni el gasto público, social y en infraestructura, ni los proyectos con dineros de la banca multilateral, ni las inversiones privadas, son por principio indeseables. Al contrario, los recursos destinados a los servicios sociales, incluyendo subsidios a la extrema pobreza, deben incrementarse significativamente, pero siempre vinculados políticas de fomento al sector social de la producción, tanto el familiar como el asociativo. Y es este sector el que necesita “incentivos”, “eliminación de obstáculos”, “seguridad, estabilidad y certidumbre” en lo tocante a políticas públicas, etc., pues se trata de una producción socialmente necesaria, tanto en términos de autosuficiencia alimentaria como de generación de empleo y por tanto de soberanía laboral. Es también un sector con experiencias exitosas y propuestas viables: tecnologías sustentables, proyectos integrales de desarrollo, formas de organización económica solidarias y más o menos equitativas. En cuanto a los recursos para el desarrollo provenientes de la banca multilateral, para que fueran virtuosos bastaría con que su normatividad social y ambiental se tomaran realmente en cuenta, y los proyectos se diseñaran con participación social informada y se ejecutaran con transparencia. Lo tocante al gran capital y las trasnacionales es más complicado, por su actitud es prepotente y lógica depredadora, y por que sus exigencias de libertad total y garantías plenas, se han transformado en ley suprema

plasmada en los tratados comerciales. Afortunadamente, cada vez es más amplio el consenso en torno a la necesidad de meter en cintura a la banca multilateral y domar al gran dinero.

Menos riguroso que Levy, el responsable del PSS Florencio Salazar, insiste en que atraer inversiones es, sin más, sinónimo de bienestar social. Además del trabajo en la construcción, de carácter transitorio y asociado a la realización de infraestructura de transporte carretero, riego y servicios industriales, Salazar destaca la creación de empleo en dos rubros: maquiladoras y agricultura. El Presupuesto de egresos para 2001 habla de que en este año se crearán “treinta y siete mil empleos bien remunerados” en las maquiladoras, cifra de por sí poco realista en tiempos de desaceleración de la economía estadounidense y cuando la tasa de crecimiento del sector disminuye a la mitad, pero que el responsable ya elevó a cincuenta mil en declaraciones del 24 de abril. Metas aparte, aun admitiendo que, como dijo Salazar, las maquiladoras “no son el diablo que se nos mete”, lo dudoso es que se trate de “empleos bien remunerados”, pues las 337 empresas de ese tipo que ya existen en la región –el 10.3% del total nacional– pagan sueldos 30% menores a los de sus semejantes del centro, y 40% más bajos que las plantas fronterizas. Pero la promesa más discutible es la creación de empleos agropecuarios, pues “...arrendar grandes extensiones de tierras... para establecer una agricultura de plantación... donde se cultiva, en forma tecnificada, un único producto de tipo perenne... por parte de agentes económicos dotados de amplios recursos financieros” (Levy), quizá permita explotar las “ventajas comparativas” de la región, “reprimidas” por las viejas “políticas públicas”, pero difícilmente generará más y mejor empleo que el actual, sobre todo si tomamos en cuenta que las nuevas plantaciones deberán sustituir a las pequeñas, ineficientes y diversificadas parcelas campesinas.

Algunos dicen que el plan con maña de los megaproyectos del Sur es frenar el éxodo a Estados Unidos, mediante corredores transversales sustentados en vías interoceánicas de comunicación y plagados de servicios comerciales y maquiladoras. De ser así, debo reconocer que, por fin, coincido en algo con esas intenciones. Por que, efectivamente, hay que detener las compulsiones migratorias de los surianos; afán que desgarró tanto familias como culturas y amenaza con vaciar nuestros países. Los viajes ilustran, pero no cuando son el peregrinar de la miseria y la desesperanza. De modo que, en efecto, los mesoamericanos deben ser retenidos en sus lugares de origen. Pero que se queden por estos rumbos -y viajen *al gabacho* sólo de vacaciones- no tiene por que resultar de la intercepción por los corredores maquileros al uso: infiernos sociales cuyas ventajas comparativas son, además de las buenas comunicaciones, los laxos y soslayables controles ambientales y las luídas y transgredibles regulaciones laborales. Parar la migración económica compulsiva es restaurar la esperanza en un futuro local o regional habitable. Y en este futuro habrá producción agrícola, agroindustria y servicios; como habrá industria, incluyendo

maquiladoras. Lo que no puede haber son condiciones laborales dignas de la Inglaterra del siglo XIX, saqueo de los recursos naturales como en tiempos de las Compañías de Coloniales de Ultramar y trabajo agrícola forzado como el de las plantaciones y monterías del porfiriato.

No se trata de rechazar por principio las inversiones. El problema está en reducirlo todo a la creación de “polos de desarrollo”, donde quizá se aprovechen las “ventajas comparativas” en términos de recursos locales, pero que difícilmente responderán a los requerimientos sociales de la región, de modo que la mayor parte de la gente seguirá siendo pobre, marginada y migrante. Y lo será aun más si, con tal de no “reprimir” el “potencial productivo”, se propicia la concentración de la tierra vía venta o renta, y las grandes plantaciones celulósicas, huleras o de otro tipo, arrasan con lo que resta de la economía campesina. Estos “polos de desarrollo” serán, entonces, auténticas economías de enclave, vinculadas sin duda al mercado mundial pero de espaldas a la sociedad local. Tiene razón Levy, siguiendo este modelo, con el desarrollo económico del sureste no remite la pobreza social del sureste, al contrario, aumenta.

¿Qué hacer entonces? ¿Tratar de compensar el daño con gasto social asistencialista y focalizado, que al formar “capital humano”, en el largo plazo les permita a los locales sobrevivientes aprovechar las “oportunidades” del crecimiento? ¿Oponerse a todo desarrollo económico pues resulta intrínsecamente maligno? Pienso que la salida está en repensar la economía y su estatuto, para que, escapando de la presunta dictadura del mercado, podamos hacer del fomento productivo, no un fin en si mismo sino una palanca del desarrollo social. Y para esto no hace falta negar de manera voluntarista las “ventajas comparativas”. Las “señales del mercado” son, sin duda, condicionantes de toda política de fomento que se respete, premisas duras de cualquier estrategia de desarrollo, pero los valores y objetivos del proyecto deberán ser de carácter social. La función del Estado no es ser el crupier que sirve cartas marcadas a los taures del gran dinero y la política económica no está para hacerle los mandados al mercado. Necesitamos una economía del sujeto y no del objeto, una economía que se ocupe de necesidades y potencialidades humanas y no sólo de mercancías, una economía moral. Y como veremos más adelante esta economía ya existe, no en los megaproyectos gubernamentales, pero sí en la lógica de la producción doméstica rural, en la vida comunitaria, en las prácticas de algunas organizaciones campesinas.

III.- El sur que viene

Tomó la brújula e hizo girar la aguja, sin advertir que se perdía en un ensueño momentáneo, y concentraba la atención en el borne serpentino..., en la imagen confusa, incierta, pero poderosa, que se resumía en el concepto Sur, con toda su magia dormida y su energía mesmérica...

...

Caminaba a orillas del agua rumbo al sur, bajo el calor y la lluvia crecientes... como un segundo Adán en busca de los olvidados paraísos del sol renacido.

Ballard. El mundo sumergido

Al tiempo que el gobierno de Vicente Fox anunciaba la Marcha al Sur-sureste, en Chiapas la comandancia del EZLN emprendía un recorrido de tres mil kilómetros y doce estados con destino a la capital de la República. Así, mientras los norteños proclamaban la nueva colonización, el sur profundo se apersonaba en el corazón político del país, en una confrontación simbólica de estrategias, proyectos e imaginarios, que culminó con el mensaje de la *comandanta Esther* en el recinto de la Cámara de Diputados.

Con una cobertura mediática que sólo alcanzan los informes presidenciales, el 28 de marzo del 2001 en el sanctasantórum del poder, en el lugar diseñado para rendir culto al gran tlatoani, se dirigió a la nación para abogar por los derechos de su pueblo una mujer indígena, pobre, zapatista, embozada con un pasamontañas y, por si el simbolismo fuera poco, conocida como *Esther*, el personaje bíblico que ingresó al aposento más reservado del rey persa, al que solo accedían los llamados, para hablar en defensa del pueblo judío. Y el medio fue el mensaje: desde allá abajo, desde las orillas de la patria, los más pequeños alzaron la voz para anunciar un nuevo proyecto de país. No una proclama revolucionaria, no una promesa partidista, no un programa de gobierno; una modesta utopía que lleva décadas edificándose sin pedir permiso. El reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indios era el motivo inmediato de la movilización, no su sentido último; de modo que semanas después unos legisladores torpes y mezquinos pudieron abortar la propuesta de cambio constitucional negociada en San Andrés, lo que no pueden es desviar las corrientes profundas de la historia. A los indios ya nadie les quita lo marchado. Con leyes adecuadas o adefesios jurídicos como el que aprobaron las dos Cámaras, los pueblos originarios continuarán su reconstrucción. Y con ellos marchan los demás excluidos, el mayoritario México raso, que expulsado de la modernidad librecambista ha tenido que inventar una socialidad otra; un

orden solidario edificado en los intersticios del sistema; un modo de convivencia que, a falta de socialismo, resulta el único paradigma libertario disponible. Es esta organicidad alternativa la que confronta a la nueva colonización.

Ante el PPP, el PSS y otros proyectos ominosos, no basta resistir. Y en este caso la simple oposición es una estrategia contraproducente. Sin duda es necesario cuestionar, develar las perversas intenciones más o menos ocultas, criticar paradigmas, pero lo fundamental es tomar la iniciativa proponiendo opciones. Porque el orden mesoamericano vigente es indefendible. En el sur las cosas no están como para preservarlas. El cambio es indispensable, urgente, de vida o muerte, y si al que anuncian los gobiernos no contraponemos otro, la nueva colonización se impondrá, pues muchas comunidades piensan –y con algo de razón- que no pueden estar peor que como están. Hay que proponer, pues; plantear valores, criterios y métodos distintos a los del desarrollismo neoliberal. Pero los conceptos alternativos pueden y deben respaldarse con experiencias en curso, modos diferentes de hacer las cosas que están demostrando su viabilidad.

El Plan Sur-sureste plebeyo y el Proyecto Puebla–Panamá de los pobres, deberán transitar sobre dos rieles paralelos: el autogobierno local y regional, dramatizado por la autonomía de los pueblos indios, pero generalizable al conjunto de la población; y la autogestión socioeconómica, encarnada en organizadores de productores como las de los cafetaleros, pero que puede abarcar al conjunto de la vida económica local y regional. Democracia extendida que incluye trascendiéndola a la electoral y representativa y economía moral que reconociendo la lógica del mercado la subordina a fines humanos.

La democracia radical y la economía del sujeto, son alternativas que vienen del Sur. No por algún privilegio ontológico de los trópicos o virtud intrínseca de las viejas civilizaciones equinociales, sino por que ahí se concentran el despotismo y la injusticia; por que en el orden bárbaro de la periferia inventar opciones solidarias es de vida o muerte. Y las alternativas surianas no son ocurrencia de última hora, se han venido gestando en décadas de forcejeo social. En México, el movimiento rural del último tercio del siglo XX recorre tres etapas claramente diferenciadas: durante los setenta renace y cobra fuerza la lucha por la tierra, maniatada durante más de cuarenta años por la interminable reforma agraria mexicana; en los ochenta se despliega la economía asociativa autogestionaria de los campesinos; en los noventa se desata la insurgencia ciudadana por la democratización de los gobiernos locales, cuyo núcleo es el movimiento por los derechos autonómicos de los pueblos indios. En términos generales estas vertientes se despliegan en sucesión, pero también se traslapan como secciones de un telescopio. Así, en el centro del trajín rural se encuentra la ancestral lucha por que la tierra sea un bien colectivo al que se accede por el trabajo, sobre ella se sustenta el combate autogestionario por reducir la asimetría de la producción

campesina respecto de la economía global y rodeándolas encontramos la reivindicación de la autonomía política, entendida como libre determinación de los pueblos indios, pero también como democratización y fortalecimiento de todos los gobiernos locales. O, para resumirlo en tres palabras que pudo haber usado Zapata: *Tierra, equidad y libertades*.

Estos grandes afluentes del movimiento rural son experiencias compartidas por casi todos los países mesoamericanos. En Centroamérica la lucha por la tierra responde a los avatares del proceso de expulsión y acorralamiento campesino, originado por la formación de latifundios agroexportadores, y por tanto se articula con la reivindicación laboral de los jornaleros. El común paradigma “bananero”, encarnado en vertiginosas plantaciones de plátano, pero también de caña, café, algodón y otros productos exportables, dio lugar en toda región al temprano surgimiento de sindicatos rurales, organizaciones que por lo general agrupaban a los obreros agrícolas de las fincas con los campesinos parcelarios de la misma comunidad. Así, en Honduras, las Ligas Agrarias Campesinas, integradas entre 1920 y 1950, desatan en 1954 una gran huelga bananera; pero para los primeros setenta se multiplican las ocupaciones de tierras, que derivan en una reforma agraria redistributiva, revertida por un golpe militar, que a su vez propicia nuevas y más enconadas tomas de tierras. Expresión de este combativo proceso es el Frente Nacional Campesino Hondureño, que se forma en 1979. En Nicaragua, desde mediados del siglo pasado la Confederación General del Trabajo organiza sindicatos campesinos, cuyas movilizaciones de los primeros sesenta le imponen al presidente Somoza la fijación del salario mínimo. Pero junto a las reivindicaciones laborales, los campesinos de León y Chinandega, arrinconados por las plantaciones algodoneras, cañeras y bananeras, y los de Matagalpa, acosados por las fincas cafetaleras, emprenden el corte de cercas y la recuperación de tierras, forzando la ejecución de una reforma agraria. La brutal represión de los primeros setenta interrumpe el proceso, que sin embargo se reanuda con la formación en 1976 de la Asociación de Trabajadores del Campo, impulsada por una de las tendencias que conformaban el guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y aunque el sandinismo ve a los campesinos como fuente de cuadros combatientes y base de apoyo, más que como sustento de un proyecto de transformación social, sin duda los pequeños productores rurales fueron parte de la revolución de 1979. En Costa Rica, la lucha por la tierra se desata durante los sesenta y se generaliza en los primeros setenta abarcando la Zona Atlántica, la Zona Sur, Guanacaste y la Región Norte, la represión de los hacendados y la guardia rural lejos de frenar el movimiento propician el surgimiento de las primeras Ligas Campesinas, que después impulsarían la reforma rural de los setenta, módico reparto que no impidió la intensificación de las ocupaciones agrarias en los primeros ochenta, y la formación por esos años de la Federación Nacional Campesina.

La lucha económica a través de formas asociativas de producción, es también una

experiencia mesoamericana compartida, que por lo general se desarrolla a partir procesos más o menos intensos de reforma agraria y se manifiesta como impulso autogestionario que resiste o trata de revertir el cooperativismo clientelar y vertical impuesto por los gobiernos. La actividad del Instituto de Tierras y Colonización de Costa Rica, desde los sesenta, es un buen ejemplo de los límites de cooperativismo burocrático; línea que por los mismos años también impulsa el somocista Instituto Agrario de Nicaragua, y junto a la cual se desarrolla un cooperativismo autónomo o patrocinado por la Iglesia y por agencias privadas. Pero el ejemplo mas interesante de organización campesina autogestionaria lo aporta la revolución nicaragüense de 1979; aunque paradójicamente la experiencia más valiosa no es la resultante de la reforma agraria sandinista sino la que se construye desde la sociedad en las difíciles condiciones creadas por la derrota de la revolución y las políticas reprivatizadoras. Nicaragua es hoy uno de los países con mayor proporción de economía asociativa, y esta es producto de la reforma agraria sandinista, pero también de la formación de cooperativas a raíz de la desincorporación neoliberal de los noventa, cuando se privatizaron los bienes fundarios y agroindustriales en propiedad del Estado, una parte de los cuales pasó a manos de la burguesía, mientras que otra se destinó a dotar de medios de trabajo a excombatientes -tanto del ejército sandinista como de la Contra-, y otra más quedó en propiedad de los trabajadores de las antiguas paraestatales. Actualmente conforman el sector reformado 150 mil familias de agricultores, dos mil empresas cooperativas y alrededor de 50 mil trabajadores agropecuarios y agroindustriales, que juntos controlan más de la mitad de las tierras dedicadas a granos básicos, pero también superficies con café, caña, tabaco, plátano, ajonjolí, sorgo, soya, hortalizas, ganado de carne y leche, así como pesca y numerosos procesos agroindustriales. Diversidad de unidades de producción y cooperativas que tienden a integrarse en organismos superiores como la Unión Agropecuaria de Productores Asociados, que se formó en 1994 con alrededor de 20 mil participantes. Orlando Núñez, uno de sus impulsores y teóricos, caracteriza así a la que llama Economía Popular: “El proyecto asociativo autogestionario constituye históricamente la síntesis posible de los ideales y potencialidades encerradas y desencadenadas por la revolución francesa, la revolución comunista y los movimientos libertarios: libertad, igualdad y fraternidad respectivamente...” Pero no sobreestima sus alcances: “La economía popular... no es un modelo para cambiar o subordinar al sistema actual, no es un modelo para todo mundo o para todas las naciones, sino un proyecto para construir una alternativa económica, social, política y cultural de resistencia... frente a los desastrosos efectos de la globalización.”

De una u otra manera, en los últimos treinta años todas las naciones mesoamericanas han vivido luchas por la tierra, reformas agrarias estatistas tibias o radicales y formas autogestionarias de producción asociativa, de modo que los pueblos de la región tienen experiencias semejantes. Ya

sólo falta que sean experiencias compartidas, pues son el patrimonio común del que habrá de surgir el Plan Panamá-Puebla de los pobres. Pero hasta ahora hemos hablado de trajines agrarios y agrícolas; combates por la tierra y la equidad. ¿Qué pasa con la reivindicación de las libertades? En el caso de México la etapa superior de los movimientos rurales se centra en el autogobierno local y tiene su forma más acabada en la lucha indígena por los derechos autonómicos. ¿También esto lo compartimos con el resto de las naciones centroamericanas?

IV.- Los originarios como paradigma

¿Quién dijo que estamos cansados de ser indios?

Yabiliquinya, cacique Kuna de Panamá

Los derechos y los torcidos

Del Sur, y precisamente de los que fueron humillados por ser otros, nos viene la más fuerte reivindicación de la pluralidad, de la diversidad vituosa. No es que los indios sean tolerantes por naturaleza, al contrario hay en sus comunidades expresiones vergonzosas de exclusión. Lo que pasa es que ellos han sido discriminados por su diferencia. Y sólo desde allí, desde la otredad despreciada y ofendida, se puede acceder a la pluralidad, se puede asumir la tolerancia, no como dadiva generosa del igual por antonomasia sino como conquista del distinto.

Si para combatir la inequidad hay que asumirse explotado, para reivindicar la dignidad en la diferencia hay que hacerse indio (léase negro, mujer, homosexual, minusválido...). Es por ello que el fundador simbólico de nuestra identidad americana fue Alvar Núñez Cabeza de Vaca. No por que haya decidido vivir y morir entre los indios, que no lo decidió; no por que haya casado con india y engendrado hijos mestizos, que no los engendró. Alvar nos funda, cuando después de vagar por nueve años entre pimas, siux, ópatas y apaches, se descubre pálido y desnudo chichimeca ante los ojos –“tan atónitos”- de los hombres blancos y barbados de Nuño de Guzmán. Cuando el jerezano es visto por los cristianos como indio, y por un momento mira a los altos jinetes con ojos despavoridos de chichimeca, ha nacido una nueva identidad. Por que el único sincretismo americano habitable es el que se construye desde la condición indígena. No por que sean bonitos o feos, o por que sumen cuarenta millones, que podían ser menos o más. Es que sólo desde la natal o adoptiva visión de los vencidos, podemos reconciliarnos con la conquista, perdonar el daño que nos hicimos y hasta reconocer el arrojío de la espada y el fervor de la cruz. No se puede fincar identidad

soslayando el despojo; los vencedores escriben la historia, pero son los derrotados quienes la siembran, la forjan, la tejen y la curten; quienes la sudan, la lloran y la cantan. Reivindicar la indianidad de América no es exaltar lo autóctono sobre lo occidental, ni preferir la sangre de un orden cruel al oro de un orden codicioso; no es tampoco vocación de derrota o de martirio; es una inexcusable opción moral por los vencidos, los resistentes, los constructores en la sombra. Y es en esta opción moral donde han fallado genófobos torpes e inteligencias preclaras; es esta incapacidad para adherirse -para compadecer- lo que transforma en racistas tanto a los indiófobos corrientes como a muchos pensadores sofisticados... y también a ciertos indianófilos epidérmicos, cuya exaltación a ultranza de la pureza y perfección autóctona oculta el desprecio por el indio feo realmente existente.

Cuando a los indios se les escatima la libertad de autogobernarse alegando que sus usos y costumbres son bárbaros, en el fondo se está cuestionando su derecho a la libertad, su condición humana. El debate no es sobre que tan virtuosas o viciosas son las prácticas de tal o cual comunidad, sino acerca de su capacidad colectiva para enmendarse, para reinventarse. ¿Deben los indios ser llevados de la mano a la tal civilización o pueden emanciparse a su aire y por su pie? Esa es la cuestión. Y por poco que nos metamos en sus guaraches veremos que son capaces de hacerlo. Vaya si lo son. Pocas prácticas y discursos han cambiado tanto y tan bien en los últimos diez años, como los dizque inamovibles hábitos sociales y mentales de los indios: de las formas de elección directa como vía para perpetuar el cacicazgo a la designación por consenso democrático y la rendición de cuentas de las autoridades; de la discriminación extrema de la mujer a una participación femenina que ya quisieran otros grupos sociales; y ante todo su pasmoso tránsito de la vergüenza al orgullo, de ser una población dispersa y degradada, objeto de asistencia pública y curiosidad científica, a constituirse en sujeto social deliberante, propositivo, movilizad. Que aun son excluyentes, sexistas, violentos, borrachos... ¡Claro que si! Como todo mundo. Y precisamente por eso necesitan la autonomía; por que 500 años de heteronomía y saqueo los han llevado a esta triste situación.

Empecemos por el racismo de los liberales decimonónicos. En el Congreso Extraordinario Constituyente de 1856-57 se debate la viabilidad del jurado popular, un derecho de base comunitaria -pues al jurado lo formaban los vecinos- que puede tomarse como ejemplo de otros derechos consuetudinarios. Si cambiamos jurado por usos y costumbres, escucharemos un debate actual: "...en la generalidad del país no hay la ilustración necesaria, la moralidad bastante a sostener el jurado... -dice Ignacio Vallarta- ...por una población como la de la capital, ¡cuantas no están sumidas en la densísima ignorancia! ...Nuestro pueblo está en su infancia, infancia viciada por la

serie no interrumpida de pronunciamientos...”. Más claro, el diputado por el Estado de México, Mariano Arizcorreta, hace primero “...grandes elogios de la República Romana... (y luego)... por una rápida transición... se traslada a un pueblo de indios otomíes que viven en los montes, y pregunta si entre ellos es posible el jurado. Imposible se contesta, por que los indios otomíes van a juzgar a otros indios otomíes. Para fundar su oposición en hechos, cuenta que actualmente se juzga a una mujer por hechicería, que en el Tribunal Superior del Estado de México existe una causa en la que aparece que un pueblo entero acordó enterrar a un brujo creyendo que sus hechizos habían causado la muerte de un hombre, que en otro pueblo de Oaxaca han sido quemados siete brujos ¿Es ésta la garantía que ofrecen los jurados? De estos hechos se infiere que el jurado es imposible en México por que el pueblo no está ilustrado”.

Escuchemos ahora a Enrique Krauze y Pedro Viqueira, dos brillantes historiadores contemporáneos; que en el primer número de la revista *Letras Libres* reflexionan prácticamente al alimón sobre el costo de dejar en manos de las comunidades indígenas la elección de su camino. “El historiador Juan Pedro Viqueira...-escribe Krauze- afirma que (el obispo) don Samuel Ruiz idealiza la condición indígena... A Viqueira le preocupa la legitimación política de esa idealización... En el caso de los indígenas de Chiapas cuyos usos y costumbres son ajenos al concepto y la práctica de la tolerancia, el resultado habitual ha sido la expulsión (caso Chamula), el asesinato y el martirio. La atroz matanza de Acteal fue el caso extremo de esa tendencia” En otro ensayo el mencionado Viqueira concluye: “...introducir como método de elección de las autoridades municipales los “usos y costumbres”... podría agravar aun más los problemas internos de los municipios... Los únicos beneficiarios serían, sin duda, los caciques y prestamistas... los “usos y costumbres” pueden llegar a ser la mejor forma de mantener un orden férreo y autoritario, legitimado en nombre de las “auténticas tradiciones mayas”, en la gigantesca reserva de indígenas desempleados y alcoholizados (el alcohol también es parte del “costumbre”), que podría llegar a implantarse...” Y al igual que Arrizcorreta, después de la afirmación generalizadora Krauze nos endosa el ejemplo contundente que descalifica cualquier objeción. Camino a Bochil los dos historiadores ven mujeres cargadas con “tercios” de leña: “Le comento a Viqueira -escribe Krauze- la teoría de algún antropólogo, referida por don Samuel: los hombres van por delante de la mujer cargada y los hijos, por el resabio instintivo de protegerlos de las fieras o culebras que pudieran salirles al paso. Viqueira responde con escepticismo: “Por lo general los defensores van borrachos””. La argumentación es astuta: primero se inventa un antagonista (“algún antropólogo”), después se le refuta con ironía y luego se extrapola el ejemplo (“por lo general...van borrachos”). El resultado es la descalificación de los antropólogos, de Samuel Ruiz y de los indios proverbialmente alcoholizados.

En argumentaciones como estas se sustenta la ideología que en 1856 condujo al

Constituyente a rechazar los jurados y en 2001 propició que el Congreso suprimiera de la iniciativa de ley indígena los derechos “excesivos” previamente negociados entre el gobierno federal y los representantes de las comunidades. Ya lo dijo Francisco Zarco, compilador y cronista de los debates de 1856-57: “¡Otra batalla perdida! ¡Otra reforma frustrada! El juicio por jurados fracasó ayer en la Asamblea Constituyente por que no es tiempo que nuestro pueblo goce de esta garantía. Tal vez lo sea cuando todos los ciudadanos sean jurisconsultos”

Más sofisticado pero igualmente contundente, es el análisis que Bartolomé Calvero hace del debate sobre los jurados y que igualmente puede aplicarse a la castración legislativa de la ley indígena: “No es que no viniera o no siguiera haciéndolo, juzgarse a si mismo, pero lo que se dilucidaba era la cobertura constitucional de unas jurisprudencias existentes, las indígenas. Y el argumento parece entonces decisivo para aquella asamblea constituyente por cuanto identifica el objetivo del mismo prejuicio de la ignorancia de los pueblos, de la conveniencia que se entiende de que la ley los civilice. Ahí radica entonces el asunto. Resulta así que no estaba exactamente discutiéndose... si el pueblo mexicano podía juzgar al pueblo mexicano, sino si los pueblos indígenas podían juzgar a los pueblos indígenas, si esto iba a admitirse constitucionalmente”.

Y así como en 1857 no se admitieron constitucionalmente los jurados, en el 2001 los legisladores del PRI y del PAN, abortaron la ley indígena negociada en San Andrés y aprobaron una caricatura. Una ley donde se reconoce declarativamente la autonomía de los pueblos originarios, pero se la vacía de contenido al considerar a las comunidades objetos de “interés público” y no sujetos de “derecho público”; al no reconocer el derecho al uso colectivo de sus territorios sino al “uso preferente” de los “lugares que habitan”; al limitar al ámbito municipal la posibilidad de asociarse de las comunidades indígenas, cuando muchos pueblos no sólo abarcan varios municipios sino que se extienden por dos o mas estados de la República; al ubicar en un artículo transitorio y sólo “cuando sea posible” la redefinición de las demarcaciones electorales en función de la ubicación de los pueblos, que debía garantizar la representación política de los indios. Un adfesio que, después de enumerar en nueve prolijos e improcedentes apartados todo lo que el bondadoso Estado se compromete a hacer por el desarrollo de los pueblos indios, dinamita el enunciado con un párrafo final donde se dice que “toda comunidad equiparable tendrá los mismos derechos”, es decir que para presentar como “generosa” una ley amputada, le añadieron al Artículo sobre derechos indios una retahíla de políticas públicas que incumben por igual a todos los mexicanos.

La cuestión de si los indios tienen o no capacidad para autogobernarse, es recurrente en la historia de México, y en torno a ella se han definido el bando progresista y el conservador. Veamos la confrontación de dos historiadores importantes, con motivo de las reivindicaciones autonómicas del pueblo yaqui: “Los yaquis... eran agricultores, y bárbaros y pretendían ser nación y hablaban de

la “nación yaqui” como un francés de la nación francesa... Ningún mexicano debió haber aceptado la existencia de una nación yaqui o de cualquier otra clase, dentro de la nación mexicana...(pues)... los derechos de la nación yaqui... mermban el territorio nacional y ofendían gravemente la soberanía... En México el 35% de la población es de indios aborígenes, y el 65 restante de criollos y mestizos, y según... los defensores de los yaquis, los mestizos criollos y extranjeros propietarios en México, deben restituir a los aborígenes todo lo que los españoles les quitaron... El zapatismo ha sido una consecuencia lógica del yaquismo. El general Díaz, identificado con los gobiernos civilizados del mundo, no aceptó la doctrina zapatista.... Era imposible que el general Díaz, justamente orgulloso de haber hecho de México una nación seria... se sometiese... a las exigencias de una tribu, ofensivas para el patriotismo mexicano, para la civilización, para el decoro del gobierno; y con la bandera tricolor en la mano... prefirió seguir la guerra...”

No, no se trata del senador panista y artífice del aborto legislativo de la Ley Cocopa, Diego Fernández, sino de su colega Francisco Bulnes, porfirista, contrarrevolucionario, antizapatista y sostenedor de la superioridad racial de los comedores de trigo sobre los comedores de maíz. Y así le responde, años después, otro polemista destacado: “Porfirio Díaz y su gobierno no vieron en (el alzamiento yaqui) sino una cuestión de orden y disciplina, y, en consecuencia, no pensaron más que en la solución militar... La aberración, la ineptitud cabal e irremediable de Díaz y su Gobierno para ver este problema, puede medirse si se recuerda que uno de sus principales corifeos, ese monstruo de necesidad que se llamó Francisco Bulnes, se alarmaba, todavía en 1920, ya con el espectáculo de la lección de la Revolución mexicana a la vista, ante la pretensión que tuvieron los yaquis de seguirse gobernando ellos mismos como lo habían hecho toda la vida. Bulnes se preguntaba indignado cómo podía imaginarse y consentirse una república dentro de una república”. De que manera juzgaría don Daniel Cosío Villegas, quien escribió esto en los cincuenta, el que medio siglo después algunos sedicentes discípulos suyos y otros “monstruos de necesidad”, le sigan negando a los indios el derecho a autogobernarse, del modo “como lo habían hecho toda la vida”.

De la vergüenza al orgullo

En algunas regiones los censos muestran un sorprendente crecimiento de la población indígena. No es que sean más, es que antes negaban su condición a los encuestadores mientras que ahora la proclaman. El vuelco se dio en menos de diez años, pero podemos buscar sus antecedentes un cuarto de siglo atrás, en el Primer Congreso Indígena Fray Bartolomé de las Casas, arranque de una nueva etapa del movimiento étnico mexicano, que deja atrás al indigenismo paternalista e integrador de la posrevolución.

Realizado en San Cristóbal, Chiapas, los días 13, 14 y 15 de octubre de 1974, el encuentro

congrega a 587 delegados tzeltales, 330 tzotziles, 161 choles y 152 tojolabales, provenientes de 327 localidades, y aunque el gobierno firma la convocatoria, el hecho es que las comunidades se apropian del proceso. Los debates y conclusiones se estructuran en torno a cuatro temas que ponen en claro los ejes profundos del movimiento indígena. El primero es *Tierra*, que formula la demanda histórica y básica de todos los campesinos, en este caso en términos de restitución pues se trata de los poseedores originarios: “Exigimos que las tierras comunales que quitaron a nuestros padres que nos las devuelvan” (Acuerdos). El segundo es *Comercio*, que sintetiza las demandas justicieras en el ámbito de la economía: “El fruto de la tierra no da ganancia para nosotros sino para los comerciantes... siempre es así: vendemos barato, compramos caro...” (ponencia tzeltal) “Queremos un mercado indígena, es decir que nosotros mismos seamos quienes compramos y vendemos... Queremos organizarnos en cooperativas de venta y producción para defendernos de los acaparadores y para que las ganancias no salgan de la comunidad” (Acuerdos). El tercero es *Salud*, donde se condensa la carencia de servicios, en su aspecto más dramático. El cuarto es *Educación*, que articula los derechos a la propia cultura, empezando por el idioma, y por extensión abarca la preservación de los usos y costumbres: “Queremos que se preparen maestros indígenas que enseñen en nuestra lengua y costumbre” (Acuerdos). Y estos cuatro aspectos son los rectores de un proceso de organización: “...las comunidades indígenas de Chiapas -tzeltales, tzotziles, tojolabales y choles- en pie de lucha y para rescatar nuestra dignidad y nuestro derecho a la tierra, a la educación y a la salud; unidas contra la explotación y exigiendo respeto a nuestra forma de vida dentro de la nacionalidad mexicana, hemos realizado el Primer Congreso Indígena, para volvernos a organizar y luchar con más fuerza, sobre la base de que somos trabajadores del campo” (Acuerdos).

Del congreso surge una poderosa avenida organizativa que fluye por distintas vertientes. La primordial demanda agraria encarna en agrupaciones de lucha por la tierra como La Casa del Pueblo, del municipio de Venustiano Carranza, que se forma en 1976; y la Organización Campesina Emiliano Zapata, (OCEZ), que se integra en 1980 y opera en las zonas Centro, Altos, Norte y Frontera. El reconocimiento de que los indios son “trabajadores del campo”, se expresa en la labor con jornaleros que desde 1976 emprende la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), primero con peones acasillados de fincas cafetaleras y ganaderas de Simojovel, Huitiupan y el Bosque, en la zona Norte, y luego entre los cortadores de caña del Ingenio de Pujiltik, en el Centro, aunque finalmente los ejes chiapanecos de esta central nacional estarán en la lucha por la tierra y la organización productiva. La preponderancia que en los debates tuvieron las reivindicaciones económicas se expresa en las uniones de ejidos que proliferan en la segunda mitad de los setenta, como la Quiptik ta Lecubtesel, de Ocosingo, que se forma en 1975 a partir de la convergencia de comunidades iniciada dos años antes. Pero aquí nos ocuparemos de

cómo el Congreso de San Cristóbal catalizó al movimiento propiamente indígena, mientras que la vertiente productiva y autogestionaria, compartida con todos los campesinos, será materia de otro apartado.

Al principio es el corporativismo quien sale al quite, y la oficialista Confederación Nacional Campesina (CNC) promueve la formación de Consejos Supremos por etnia y en 1975 convoca en Pátzcuaro un Congreso Nacional de Pueblos Indígenas. Desde 1974 ya existía el Movimiento Nacional Indígena, como parte de la CNC, pero en el congreso de Pátzcuaro se constituye el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), que pese a su origen por unos años mantiene posiciones críticas frente al gobierno, hasta que en 1981 es retomado por líderes más complacientes con el régimen. En 1985 el Consejo se transforma en Confederación, se incorpora al PRI y reclama su reconocimiento como cuarto sector. De las divisiones en el seno de los gobiernistas nace, en 1981, la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI).

Pero la corriente principal del proceso organizativo son los agrupamientos regionales. Algunos aglutinan diversas comunidades de una sola etnia, como el Comité de Defensa y Desarrollo de los Recursos Naturales de la Región Mixe, transformado después en Asamblea de Autoridades Mixes, de Oaxaca (ASAM); la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI), que agrupa a zapotecos de la misma entidad; la Unión de Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ), formada por purhepechas de Michoacán; la Tosepan Titataniske, de la que son miembros nahuas, totonacos y otomíes de Puebla; la ya mencionada Unión de Ejidos Kiptik ta Lucubtesel, que agrupa tojolabales, tzeltales, tzotziles, choles y mestizos, de Chiapas; la Organización Independiente de Pueblos Unidos de las Huastecas, que con otros forma el Frente Democrático Oriental de México “Emiliano Zapata”; en la ciudad de México se constituye en 1989 el Consejo Restaurador de Pueblos Indios, formado por mexicas de los pueblos del D. F., pero también por núcleos de avecindados de otras etnias. Hay también convergencias de dos pueblos, como la Organización de Defensa de los Recursos Naturales y para el Desarrollo Social de la Sierra Juárez, con zapotecos y chinantecos; y multiétnicas como la Unión de Comunidades indígenas de la Región del Istmo (UCIRI), con zapotecos, mixes, mixtecos y chontales, y el Consejo de Pueblos de la Montaña de Guerrero, con mixtecos, tlapanecos, nahuas y amuzgos, entre otras. Finalmente, algunos agrupamientos son multiétnicos por representación, binacionales por territorio y salteadas por geografía, como el Frente Mixteco, Zapoteco Binacional, luego Frente Oaxaqueño Binacional, que tiene bases en Oaxaca, en el noroeste mexicano y en la California estadounidense; y la Red Internacional de Indígenas de Oaxaqueños, con cobertura semejante. La convergencia de múltiples comunidades y hasta diversas etnias, en muchas de estas agrupaciones se explica, no tanto por la fortaleza regional de las identidades y de los pueblos originarios, como por la cohesión proveniente

de la común problemática agraria, productiva, laboral y hasta política. Así hay organizaciones cuyo eje es la lucha por la tierra y que militan en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), como UCEZ; otras de carácter predominantemente económico, como la Unión de Ejidos Kiptik ta Lacubtesel, vinculada a la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Autónomas (UNORCA); otras más que defienden los derechos de los migrantes, como el Frente Oaxaqueño Binacional; y también algunas que destacan por haber logrado democratizar el gobierno local, como la COCEI en el municipio oaxaqueño de Juchitán.

La problemática específica de los indígenas está presente en todas estas organizaciones, actuantes durante los setenta y los ochenta, pero deviene el principal aglutinador en la inminencia de los 500 años de la conquista de América, cuando cobra fuerza el nuevo indianismo. Los encuentros de Organizaciones Indígenas Independientes de 1980 en Puxmecatán, Oaxaca, y Cherán Atzicurin, Michoacán, sólo sirven para constatar las enconadas divergencias que existen entre agrupamientos étnicos, y para recibir una delegación del Consejo Regional de Pueblos Indígenas de México Centroamérica y el Caribe, filial del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. Y el Congreso Nacional de Pueblos Indígenas, convocado por el gobierno para legitimar su iniciativa de adicionar una frase al Artículo 4 de la Constitución para que reconozca la existencia de las culturas indígenas, pone de manifiesto que también entre los oficialistas hay diferencias. Estas erráticas convergencias y divergencias encuentran cauce firme a partir del Primer Foro Internacional sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indios, reunión de organizaciones indígenas nacionales independientes realizada en 1989, en Matías Romero, Oaxaca, en la que participan también delegados de agrupamientos étnicos de otros países. Al Foro, que se repite en marzo de 1990, pero ahora en Xoximilco, D.F., asisten más de 100 representantes provenientes de 25 regiones. Hay tlapanecos, nauhas, amuzgos y mixtecos de La Montaña de Guerrero; totonacos de Puebla; otomíes de Veracruz; nauhas de la sierra de Zongolica; purhepechas de Michoacán; zapotecos, chinantecos, mixes y mazatecos de Oaxaca; huicholes de Jalisco; raramuris de Chihuahua; seris, kiliwas y papei de Baja California; od-ham de Sonora; nahuas del Distrito Federal, entre otros. De estos encuentros surge, el mes de julio de ese mismo año, el Consejo Mexicano 500 años de Resistencia Indígena y Popular, que inmediatamente se incorpora a la campaña continental de conmemoración alternativa del presunto “descubrimiento”.

Por su parte el gobierno intenta retomar la iniciativa etnicista impulsando un Consejo Indio Permanente, que se forma en 1991 y se desintegra al poco tiempo, cuando la iniciativa presidencial de suprimir el contenido agrarista del Artículo 27 constitucional, divide a las organizaciones. Desprendimientos de este Consejo forman el Movimiento Nacional de Resistencia y Lucha Campesina (Monarca) y después el Consejo de Organizaciones Agrarias (COA).

Durante los noventa los indígenas cobran visibilidad nacional con movilizaciones como las del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, que entre 1992 y 1995 marcha tres veces de Guerrero a la Ciudad de México; o la caminata al Distrito Federal nombrada Xi'Nich, que en 1992, durante 50 días y 1100 kilómetros, realizan 300 tzeltales, choles y zoques del Comité de Defensa de las Libertades Indígenas, el Consejo Independiente Tzeltal y la Unión de Campesinos Indígenas de la Selva de Chiapas.

En el arranque de la última década del siglo se multiplican las señales de que el Sur se nos viene encima. La más sintomática es la movilización de unos 15 mil indígenas de Los Altos de Chiapas, que el 12 de octubre de 1992 aterrizan a los coletos al tomar simbólicamente la ciudad de San Cristóbal y tumbar en efígie al conquistador Diego de Mazariegos. Organiza la acción el Frente de Organizaciones de los Altos de Chiapas, y en particular una flamante Alianza Nacional Campesina Indígena Emiliano Zapata, continuadora de la Alianza Campesina Independiente Emiliano Zapata, que en 1989 habían formado las bases de apoyo del núcleo clandestino y militante que cinco años más tarde se daría a conocer como Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Para la trivía: dicen que por ahí andaba tomando fotos el Subcomandante Marcos.

Después del alzamiento del EZLN el primero de enero de 1994, todo se precipita y el 10 y 11 de abril 1995 unos doscientos delegados, que representan alrededor de cien organizaciones, realizan en la Ciudad de México la Primera Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, donde se formula un proyecto de ley autonómica, a partir de ideas que venían gestándose desde los ochenta. Poco después se lleva a cabo una nueva asamblea en las tierras yaquis de Loma de Vacum, Sonora, y en agosto de ese mismo año cerca de cuatrocientos representantes se reúnen en Oaxaca. De este proceso surge la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), quien aportará relevantes ideas al debate sobre la libre determinación de los pueblos y hoy es una asociación política con registro, de la que provienen funcionarios importantes del gobierno foxista, como el nuevo Director del Instituto Nacional Indigenista (INI) y algunos delegados estatales de la misma institución.

Una parte del nuevo indianismo identificado con los insurrectos chiapanecos se expresa desde 1995 en ANIPA, pero la convergencia expresamente convocada por el EZLN arranca con el Foro Nacional Indígena reunido en San Cristóbal en enero de 1996, que forma parte del proceso de negociaciones entre el gobierno federal y el EZLN iniciado en 1995 en San Andrés Larrainzar, o Sacamchén de los Pobres. A la reunión asisten 178 organizaciones nacionales, desde grupos indígenas locales y ONGs hasta coordinadoras nacionales, y 19 organizaciones internacionales. Los casi quinientos participantes en el evento, que además de español, inglés, francés e italiano, hablan cuando menos 25 lenguas de los pueblos originarios, debaten ampliamente la agenda de San

Andrés, dándole a las negociaciones entre gobierno y guerrilla un carácter inédito, pues la posición del EZLN en lo tocante a derechos y cultura indígena no es obra sólo de este grupo sino que se ha ido consensando por el conjunto del movimiento étnico nacional. Representación orgánica y política de esta amplia convergencia es el Congreso Nacional Indígena (CNI), que se constituye y realiza su primera reunión general en octubre de ese mismo año, avalada con la presencia de la *comandanta Ramona* del EZLN. En 1998, cuando salen de Chiapas 1111 zapatistas rumbo a la ciudad de México, el CNI lleva a cabo su segundo congreso. Para entonces las conclusiones de San Andrés sobre el tema de derechos y cultura indígena, sintetizadas por la Comisión de Concordia y Pacificación del poder legislativo, ya han sido aprobadas por el EZLN y rechazadas por el presidente Zedillo. Esto conduce a la suspensión del diálogo de paz, de modo que el CNI asume los acuerdos de San Andrés y la llamada “Ley Cocopa”, como sus banderas de lucha; pero, dado que el proceso hacia la aprobación de la ley está trabado, las organizaciones acuerdan pugnar en la práctica por la autonomía en todas sus regiones y trabajar en la reconstitución de las comunidades y pueblos.

En marzo de 2001, coincidiendo con la caravana zapatista, se vive el momento más intenso de la movilización étnica, cuando cientos de miles de indígenas agarran su hitacate, abandonan las comunidades y emprenden sus propias marchas chiquitas para recibir a la comandancia del EZLN en los innumerables mítines del recorrido. La fiesta culmina en la pequeña población purhépecha de Nurío, Michoacán, donde cerca de nueve mil personas participan en el Tercer Congreso del CNI. Casi 3 400 delegados efectivos, en representación de 41 de los 56 pueblos indios que sobreviven, y provenientes de 27 estados de la República, más alrededor de 5 000 observadores solidarios, participan durante dos días en cuatro bullentes mesas de trabajo. Pero esto no es más que el filito de la nagua, pues casi siempre los delegados habían realizado reuniones preparatorias en sus comunidades de origen y en ocasiones eran portavoces de las resoluciones de amplios foros regionales. Así, en Morelos se realizó el Encuentro Sumemos Resistencias, el Foro Oaxaqueño consensó las opiniones de los 16 pueblos de la entidad, los wixárikas y nahuas de Jalisco se reunieron antes de salir para Michoacán, y lo mismo hizo el Frente Cívico Indígena Pajapeño de Veracruz, entre otros muchos que hicieron del encuentro de Nurío un “congreso de congresos”. Y es que ahí estaban todos: los agrupamientos nacionales, los regionales y los locales, y también las organizaciones de los trasterrados, como la Asociación de Tepeuxileños Emigrados, *In Cucä*, que agrupa a cuicatecos y mazatecos originarios de Oaxaca; la red de mixtecos, purhepechas, zapotecos y triquis que viven en Guadalajara; los variopintos migrantes avecindados en la Ciudad de México, y muchos más. En la hora de las identidades recobradas, la ocasión sirvió para que algunos se redescubrieran indígenas.

La cuestión central de los debates fueron los derechos de los pueblos indios y la necesidad

de unificarse y presionar para que fueran incorporados a la Constitución en los términos de la Ley Cocopa. Pero quedó claro que la lucha indígena no empieza ni termina en la conquista de reconocimiento constitucional. “Estamos seguros de que el Congreso... entrará en razón y nuestros derechos serán reconocidos -decía el representante de la Red Nacional de Ciudadanos y Organizaciones por la Democracia- pero no vamos a comer, ni vestir, ni curarnos con autonomía. El reconocimiento de la autonomía es un gran paso, pero todavía el camino para alcanzar la justicia, la democracia y la libertad es largo; y no es responsabilidad sólo de los pueblos indios, es de todos los campesinos, de los maestros, de los estudiantes, de los obreros...”. En la mesa uno se rechazaron el Puebla-Panamá y otros proyectos colonizadores, pero también se planteó la necesidad de impulsar programas propios. Así lo explicaba Lorenzo García, de la tribu yaqui de Sonora, “Nosotros tenemos un plan estratégico de desarrollo desde 1983 y no nos hacen caso. Reconocemos como muy importante el movimiento indígena nacional y apoyamos los acuerdos de San Andrés, pero me pregunto qué va a pasar cuando se apruebe esa ley... No basta con firmarla, tenemos que construir con nuestra lucha y nuestro trabajo las condiciones para defenderla”.

Y esta defensa se expresa, entre otras cosas, en el trajín indígena por establecer autogobiernos, con independencia de si la Constitución General de la República los incluye formalmente o no. Después de una larga lucha de las etnias por su reconocimiento, hoy en Oaxaca casi todos los municipios indígenas, pequeños y propicios al sistema de cargos y la democracia directa, se gobiernan por usos y costumbres, normas consuetudinarias que están reconocidas en la Constitución de la entidad federativa. En Chiapas, el EZLN, sus bases de apoyo y otras fuerzas democráticas, conformaron municipios autónomos, que en la práctica y sin reconocimiento ejercen la libre determinación política. En Guerrero, junto con la creciente competencia por las alcaldías, cobra fuerza la lucha por la remunicipalización, sobre todo donde los indios de las rancherías son ninguneados por los mestizos y caciques de la cabecera. “El intento de crear un municipio indígena en el Alto Balsas -escribí en *Crónicas del Sur*- prolonga la lucha de los nahuas de la región contra la presa etnicida de San Juan Tetelcingo; por su parte el Consejo de Autoridades Indígenas de la Región Costa-Montaña demanda un municipio mixteco y tlapaneco, mientras que en el pobrísimo Metlatonoc los mixtecos quieren crear un nuevo municipio de Chilixtlahuaca; finalmente, desde 1995 pobladores de Metlatónoc y Tlacoachistlahuaca sostienen de facto un municipio llamado Rancho Nuevo de la Democracia. En Costa Chica, Marquelia quiere independizarse de Ayutla y los de Pueblo Hidalgo, de San Luis Acatlán; por su parte, los mixtecos de Copanatoyac demandan municipio propio. Quien sabe si sea deseable la pulverización municipal y la separación administrativa de los gobiernos étnicos, pero no cabe duda de que en Guerrero las demandas autonómicas en el nivel de la autoridad local tienen una fuerza creciente...”

El Acta de Ratificación de los Acuerdos de Nurío firmada en San Pablo Oxtotepec, Distrito Federal, documenta la amplitud de miras del movimiento indígena. “...rechazamos tajantemente las políticas que el gran capital impulsa, por que la madre tierra y todo lo que en ella nace no es mercancía que se pueda comprar y vender, por que la lógica simple y mezquina del mercado libre no puede destruir nuestra existencia misma, por que los modernos piratas y biopiratas no deben expropiar más nuestro saber antiguo y nuestros recursos naturales, por que no puede ejecutarse un solo proyecto o megaproyecto en nuestros territorios sin nuestra participación, consulta y aprobación...”

La corriente profunda de la Torre de Babel redimida por el diálogo, que se edificó en Nurío, fue la diversidad virtuosa. Pluralidad de etnias, culturas y lenguas en coexistencia enriquecedora; pero también pluralidad de los habitat naturales, pluralidad de recursos, tecnologías y maneras de producir, pluralidad de formas de organización social, pluralidad de sistemas jurídicos comunitarios, pluralidad de fchas y vestimentas, pluralidad culinaria cuando se puede, pluralidad de cantos y de danzas. Si el ciclo emparejador del capitalismo está llegando a su fin, si el saldo desastroso de la pretensión de homogeneizar a los hombres y a la naturaleza está generando resistencias crecientes y paradigmas alternativos, el encuentro de Nurío fue una Arcadia transitoria pero alentadora, un reducto de pluralidad. No demasiado, sólo un ejemplo de que en el mundo del gran dinero también existen los diferentes, de que la convivencia en la diversidad es posible. Por eso, para muchos, Nurío y otros encuentros indígenas y campesinos resultan extrañamente conmovedores; porque pese a los excesos y desfiguros, durante unos días se experimenta la socialidad otra, el efímero topos de la utopía, lo que Jean Paul Sartre hubiera llamado el “grupo en fusión”, antítesis de la serialidad y de la inercia.

Esta intensa, multitudinaria y fervorosa construcción social de las ideas y los consensos, que arranca hace un cuarto de siglo y se intensifica en la última década, es lo que en abril del 2001 tiran a la basura, como si fuera un Klinex usado, los señores legisladores. Congresistas a los que pastorean dos patriotas calados: el senador del PRI Manuel Bartlett, quien siendo Secretario de Gobernación ejecutó el fraude en la elección presidencial de 1988, y el senador del PAN Diego Fernández, quien siendo diputado “opositor” argumentó a favor de que se quemaran los paquetes de boletas electorales que lo documentaban. Y algunos todavía dicen que democracia es lo que pasa en San Lázaro y en el Palacio de Cobián, y no lo que se fragua en asambleas y foros populares. El hecho de que el Congreso de la Unión haya sido electo democráticamente, no significa que los congresistas sean demócratas. El que los haya elegido la nación no quiere decir que legislen de cara a la nación. A menos que esos senadores y diputados sean racistas y en verdad crean que achicando la ley Cocopa defendieron a la nación de las alarmantes pretensiones de los indios. Capaz que si.

Centroamérica india.

Los indios son locales y globales. No sólo por que el éxodo económico los lleva a conocer mundo, también por que la lucha los conduce a establecer relaciones internacionales. El Consejo Mexicano 500 años de Resistencia India, se forma al calor de campaña iniciada en Colombia en octubre de 1989, y en 1990 participa en el Primer Encuentro Continental de Pueblos Indios, celebrado en Quito, Ecuador. Desde principios de los noventa uno de los precursores de la nueva oleada étnica en México, el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, acude al Encuentro Continental de Organizaciones Indígenas, realizado en Quetzaltenango, Guatemala, asiste a la Cumbre de la Tierra, celebrada en París, y sus comisionados cabildean en las oficinas que el Banco Mundial tiene en Washington. Mas recientemente tres representantes del CNI participan en la protesta multinacional de Québec, escenificada en abril del 2001 con motivo de la Cumbre de las Américas que debatió el ALCA, y en mayo del mismo año envían un comunicado a la Conferencia del Milenio, realizada en Panamá.

El continente americano ha sido laboratorio de la nueva lucha étnica, cuyas banderas son justicia y equidad, pero también reconocimiento y autonomía. Uno de los núcleos precursores es la Federación Shuar, cuyas raíces están en las tierras bajas amazónicas del oriente ecuatoriano, y que desde los setenta inició el combate, primero por la defensa del territorio y después por la identidad y los derechos políticos. Para los setenta la organización indígena de ese país deviene pluriétnica, al formarse la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Por entonces en todas las naciones andinas hay organizaciones indígenas que rebasan lo comunal y lo regional, y donde con frecuencia confluyen distintos pueblos. Ahí están la Asociación Indígena de la Selva Peruana, la Confederación Indígena del Oriente Boliviano, y en Colombia el Consejo Regional Indígena de Cauca. Y sobre esa base se va logrando visibilidad internacional: las organizaciones étnicas participan con la ONU en el Año Internacional de los Pueblos Indígenas, que fue 1993, y actualmente, con el mismo patrocinio, en la Década Internacional de los Pueblos Indígenas que abarca de 1995 al 2005. Más importante ha sido el cabildeo para sacar adelante acuerdos internacionales que reconozcan los derechos de los pueblos indígenas. En el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas hay fuertes resistencias y se ha avanzado poco, en cambio en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se logró consensar el Convenio 169 sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, un texto considerablemente avanzado y firmado por numerosos Estados, que sin embargo poco lo respetan.

En todos los países centroamericanos hay población identificada con las naciones originarias y en algunos existen grupos importantes de origen africano. En Guatemala, los cerca de

5 millones de indios de las etnias quiché, mam, kakchiquel, kekchi, kanjobal, tzutujil, ixil, achi, chorti, jalalteco, poconchi, poqoman, chuj, sacapulteco, akatako, aguacateco, y otros, constituyen alrededor del 50% de la población. En Belice los 27 300 indios principalmente garifuna conforman el 13.7% de la población. En Honduras los de las etnias lenca, miskito, garifuna, xicaque, sumo, chorti, pech, y otras, suman 630 000 y son el 12% de la población y hay un 2% de negros. En Nicaragua 326 600 miskitos, ramas, garifuna, subtiaba, moninbó y sumo constituyen el 7.3% de la población. En Panamá los ngöbe, guayni, kuna y emberá/chocó, suman 194 719 y son el 7.8% de la población, pero también hay un 14% de negros. En El Salvador hay 88 000 indios nahuatl/pipil y lenca, que conforman el 1.7% de la población. Y hasta en Costa Rica, 24 300 cabecar y bribri representan el 0.7% de la población. En México los estados comprendidos dentro del PSS contienen al 74% de la población indígena del país, 4 506 753 personas de las etnias nahuatl, maya, zapoteca, mixteca, otomí, tzeltal, tzotzil, totonaca, mazateco, chol, y otras, que constituyen el 16.4% de la población regional. Estamos hablando de casi 11 millones de indígenas, que representan el 18% de los mesoamericanos. Ante esta evidencia demográfica, subrayada en algunos casos por fuertes luchas de base étnica, las constituciones de estos países con frecuencia reconocen formalmente su carácter multiétnico y consignan ciertos derechos indígenas, además de que México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Honduras suscribieron el Convenio 169 de la OIT.

El artículo 120 de la constitución panameña de 1972 dice: "...el Estado garantiza a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas...", y posteriormente se declaró en este país un Estatuto de Autonomía.

A partir de 1987 los artículos 89, 90 y 181 de la Constitución nicaragüense consagran derechos autonómicos: "Las comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de preservar y desarrollar su propia identidad cultural en la unidad nacional, dotarse de sus propias formas de organización y administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones. El estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de las comunidades de la Costa Atlántica (...) El Estado por medio de una ley organizará el régimen de autonomía en las regiones donde habitan las comunidades de la Costa Atlántica".

La constitución guatemalteca de 1985 en sus artículos 66 y 70, establece que : "Guatemala está formada por diversos grupos étnicos (...) las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenezcan y que tradicionalmente hayan administrado en forma especial, mantendrán este sistema (...) el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten par su desarrollo". Derechos muy limitados que debieron haberse ampliado significativamente, pues en los Acuerdos de Paz de 1996 entre el gobierno y la guerrilla, se convino reconocer en la ley los derechos políticos y culturales de los pueblos originarios. Con el fin de

concretar este arreglo en 1999, se llevó a cabo un plebiscito, sin embargo la coyuntura fue aprovechada por la derecha para orquestar una intensa campaña genófoba. Así, la Liga Pro Patria afirmaba en su propaganda que con las reformas se busca crear “...un Estado indígena del que quedarían marginados los no indígenas”, por su parte la Alianza Evangélica decía que: “...esto propician las reformas, dividir y confrontar a la sociedad guatemalteca...”. Ofensiva paranoica que polarizó al país entre un altiplano indígena que dijo si a las reformas y la capital y la Costa Sur que dijeron no. Esto y un abstencionismo del 80%, hicieron que se perdiera la posibilidad de reconocer en la Constitución derechos por los que han muerto alrededor de 200 mil guatemaltecos durante la más prolongada guerra de base indígena del continente. Dos años después, en medio de campañas semejantes y con idénticos argumentos, la derecha mexicana echó para atrás partes sustanciales de la ley indígena, dinamitando las negociaciones de paz entre el gobierno y el EZLN.

Frustraciones constitucionales aparte, Guatemala es un país de acendrado despotismo, pero también de tradición guerrillera y claro protagonismo étnico. Hasta 1970 la participación indígena en la lucha armada revolucionaria había sido marginal, pues el Partido Guatemalteco del Trabajo, entre otros, veía a los indios como simple “reserva para la acción”, y a esta ausencia le atribuyen por entonces su fracaso las diezmadas Fuerzas Armadas Rebeldes. En cambio las nuevas guerrillas de los setenta, no sólo reclutan ampliamente a los indígenas, también incorporan programáticamente sus demandas. Tanto el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), que aparece públicamente en 1975, como la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), que se muestra por vez primera en 1979, son guerrillas de base étnica, como resulta evidente en acciones como la toma de Nebaj, en El Quiché, el 21 de enero de 1979, donde participan cien hombres armados, casi todos indígenas. Así lo constata Adolfo Gilly en un texto periodístico de la época: “Un rasgo peculiar y distintivo del Ejército Guerrillero de los Pobres que opera en las montañas y aldeas de Guatemala, es su voluntad declarada de afirmar sus fuerzas en la organización de los campesinos indígenas, en su idioma, su cultura, sus tradiciones”.

El nuevo indianismo, impulsado entre otras fuerzas por los sostenedores de la Teología de la Liberación dentro de la iglesia católica, es un fenómeno de alcance latinoamericano, que se expresa en Guatemala, pero también en México, donde en 1974 se realiza el ya mencionado Primer Congreso Indígena, con la decisiva participación de la diócesis de San Cristóbal. La reivindicación de los pueblos originarios adopta diferentes formas y se adscribe a distintas estrategias. Así, junto al radical indianismo guerrillero del EGP y la ORPA, surge en Guatemala un etnicismo culturalista también apoyado por la iglesia católica, aunque por corrientes más tibias, que se expresa en la realización de numerosos seminarios y encarna en la Asociación Indígena por la Cultura Maya-Quiche fundada en 1971. El culturalismo deriva en parte hacia un etnicismo excluyente y

reaccionario vinculado a sectores de la burguesía india. Entre la guerrilla y el culturalismo conservador, las corrientes hegemónicas de la iglesia católica, en el contexto de la Pastoral Indígena, promueven la formación de Ligas Campesinas, que en 1978 y junto con las Comunidades Cristianas de Base, organizan un congreso en el que se forma un Comité de Unidad Campesina (CUC). La respuesta del gobierno a la rebeldía, tanto la armada como la pacífica, es incrementar la política de exterminio, que adopta métodos semejantes a las de la guerra colonial en Vietnam. El resultado es que el pueblo se incorpora tanto a la guerrilla como al CUC. En un folleto del CUC titulado *Los hombres de maíz escriben su historia*, se deja constancia de esta participación: “Los indios han volcado todo su arte, toda su creatividad que tienen en los telares, en la guerra popular. Su creatividad la han incorporado en las armas populares: con cal, con sal, con chile, agua caliente, el pueblo ha hecho sus armas...”. En 1980, en una reunión de líderes convocada por el Comité, se adopta de la *Declaración de Iximché*, elocuente testimonio del proyecto indígena en esa fase de la lucha: “Por que nuestro pueblo indio, como tal, pueda desarrollar su cultura rota por los criminales invasores; por una economía justa en que nadie explote...; por que la tierra sea comunal como la tenían nuestros antepasados”.

En Nicaragua la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) derroca al dictador Zomoza en lo que se vive como el triunfo de una revolución tanto política como social. Pero si la guerra popular guatemalteca era indudablemente de base étnica, en Nicaragua los indígenas son menos del 8% de la población y están ubicados en la Costa Atlántica, donde por razones históricas existe una cultura miskito-creole-anglosajona, englobada por la Iglesia Morava. Así, la revolución no pasa por la porción atlántica del país y el sandinismo tiene escaso conocimiento y poca sensibilidad hacia el tema indígena. Incomprensión que deviene conflicto cuando la organización Misurasata, promovida por el FSLN, rompe con el gobierno y en medio de fuertes desplazamientos poblacionales a Honduras, desata una guerra contrarrevolucionaria apoyada por el gobierno de los Estados Unidos. Paradójicamente, en Nicaragua es la guerra restauradora la que hace visibles a los indios y propicia la definición de una política de libre determinación para miskitos, sumos y ramas. Derecho al autogobierno que consta en la Constitución: “Para las comunidades de la Costa Atlántica se establece el régimen de autonomía”, cuyo ámbito serán dos regiones atlánticas, la norte y la sur. La Ley de Autonomía se publica en 1987 y opera desde 1990, cuando se constituyen los dos gobiernos autónomos. De esta manera desde hace diez años la Constitución y las leyes de Nicaragua, recogen derechos por los que los indios de Guatemala y de México han venido luchando sin éxito por más de un cuarto de siglo. Además del reconocimiento territorial y el autogobierno, el artículo 9 de la constitución dice: “En la explotación racional de los recursos mineros, forestales, pesqueros y otros recursos de las regiones autónomas, se reconocerán

los derechos de propiedad sobre las tierras comunales, y deberá beneficiar en justa proporción a los habitantes, mediante acuerdos entre el Gobierno Regional y el Gobierno Central”. Y el artículo 181 reza: “Las concesiones y los contratos de explotación racional de los recursos naturales, que otorga el Estado en las regiones autónomas de la Costa Atlántica, deberán contar con la aprobación del Consejo Regional Autónomo correspondiente”

Derechos envidiables... que sin embargo no pasan del papel. Los gobiernos autónomos abarcan el 49% del territorio y el 11% de la población, pero sólo se les asignó el 0.1% del presupuesto del 2001; 18 millones de córdobas, equivalentes a 90 mil dólares, que evidentemente no sirven para impulsar ningún proyecto regional. Y los proyectos existen, sólo que no benefician significativamente a la población indígena, pues se trata de enclaves mineros, petroleros, madereros y pesqueros de carácter transnacional, que además se ciernen sobre una reserva de 7 450 kilómetros cuadrados de bosque subtropical húmedo. Pero lo más importante es el proyecto de un “canal seco”, con una vía férrea de 375 kilómetros que uniría el Atlántico con el Pacífico, que el gobierno piensa concesionar sin haber consultado al consejo autonómico de los ramales, que se ampararon judicialmente contra esos posibles actos. Entretanto, los más adinerados de la oligarquía ya están comprando las tierras que pronto se valorizarán.

El “canal seco” nicaragüense y el megaproyecto transístmico mexicano, son planes de gobierno que responden a intereses transnacionales, y en los que no se ha consultado a la población cuyas tierras y vidas serían afectadas. Pero mientras que en Nicaragua la libre determinación de los pueblos indios es constitucional y existen territorios y gobiernos autonómicos, en México se está cocinando una autonomía castrada sin territorios ni posibilidad de autogobierno. Diametral disparidad legal que sin embargo no hace ninguna diferencia. La lección es que las leyes son importantes, pero lo es más la fuerza con que se hagan valer. Sin efectivos sujetos autonómicos las leyes autonómicas salen sobrando.

“La autonomía es para gestionar nuestros propios proyectos y que nos reconozcan como pueblos indígenas ante las grandes autoridades, ante quienes nos gobiernan. Que seamos consultados primero antes que inicie sus programas el gobierno”, dijo la istmeña Zoila José Juan, entrevistada durante el congreso de Nurío. Pero todo hace pensar que por el momento en el istmo de Tehuantepec, como en todo el sur, las comunidades y los pueblos tendrán que hacerse escuchar por el gobierno en el marco de una ley de autonomía castrada. Habrá que seguir impulsando un cambio constitucional como es debido; pero la vida no se detiene, y entre tanto, las organizaciones indígenas, junto con las campesinas y populares, seguirán resistiendo a la colonización y luchando por sus propios proyectos, con derechos restringidos pero con fuerza incrementada. Por que el trajín indígena de los últimos años, más o menos centrado en el cambio constitucional, ha puesto en pié

en muchas regiones a sujetos autonómicos efectivos. Protagonistas sociales que están haciendo valer sus derechos, reconocidos o no, y que ahora enfrentan el desafío de los grandes proyectos sureños reactivados o creados por el nuevo gobierno. Precisamente porque nos urge una buena ley autonómica, debemos trabajar -seguir trabajando- como si no fuéramos a tenerla nunca. Y este trabajo tiene que ver con el autogobierno en los ámbitos políticos, culturales y de justicia, pero también con la autogestión de la economía y de los servicios sociales.

V.- Los hombres de maíz... y de café

Aquel siembra el café con sus manos rugosas

Este poda el café con sus ásperas manos

Otro corta el café con manos rudas

Manos iguales despulpan el café

Alguien lava café

y se hiere las manos

Otro cuida café mientras se seca

y se secan sus manos

Alguien dora café

y se quema las manos

Otro más va a molerlo

a molerse las manos

Después lo beberemos

amargo.

Efraín Bartolomé. Corte de café

El revés de la trama de la libre determinación política es la autogestión económica. Al dibujo brillante y luminoso que exhiben las culturas, lo soportan en la sombra los

enlaces, cruces y nudos de la producción y distribución de bienes materiales. Tejido que puede ser sólido o frágil, duradero o provisional, armónico o desordenado, equilibrado o disparejo, pero que acota las posibilidades del orden social. Un reverso económico expoliador e injusto es incompatible con relaciones humanas generosas y solidarias en el anverso; un tejido productivo donde se depredan el trabajo y los recursos naturales se traduce en una sociedad conflictiva, inarmónica, frágil. (No por azar contrapongo un símil textil a la proverbial metáfora arquitectónica que nos hizo hablar de *estructura* y *superestructura* como dos órdenes separados y jerárquicos donde la economía provee los cimientos. Y es que un tejido tiene dos lados, pero los hilos y cruces que lo forman son unos y los mismos; además, por importante que sea la trama sustentadora, a ninguna tejedora se le ocurriría subordinar los trazos -sociales- del anverso a los imperativos -económicos- del reverso).

Toda utopía, todo proyecto estratégico renovador e integral, tiene dos caras, una prefigura el orden espiritual deseado, la otra esboza el orden material que deberá sustentarlo. En el México raso, pobre y orillero por antonomasia, en el México del que son emblema el Sur y los pueblos originarios, la lucha por construir sujetos con identidad cultural, territorio y autonomía política, ha corrido por cuenta principalmente del EZLN y el CNI. En cambio, en la edificación de una economía autogestionaria y justiciera, los protagonistas han sido las organizaciones campesinas de producción y servicios, y en particular los agrupamientos locales, regionales y nacionales de pequeños productores indígenas de café. Sostengo que, sin una o otra de estas experiencias, el patrimonio político de los pobres del campo estaría cojo. Sin embargo, hasta ahora, los dos grandes afluentes de la lucha rural han corrido por vertientes distintas y puesto en pie diferentes sujetos. Actores que no son antagónicos sino convergentes e incluso traslapados, pero que, por ámbitos de incumbencia, por génesis histórica y hasta por táctica, se mantienen distantes. Esta lejanía ya no se puede sostener. La postergación del pleno reconocimiento institucional de los derechos indígenas, y una situación socioeconómica rural que se deteriora día tras día y que los megaproyectos amenazan con empeorar aun más, nos impone el desafío de apresurar la convergencia de organizaciones y corrientes diversas, en un sujeto unitario que, por su fuerza y representatividad, pero también por su experiencia y capacidades, esté en condiciones de orquestar una respuesta integral. Una alternativa tanto al ninguneo como a la expoliación, tanto a la marginación política como a la exclusión económica y social.

Hay mucho con que armar un proyecto alternativo. Ya hemos recorrido someramente el intenso trajín indígena por su visibilidad y sus derechos, al que habría que agregar el forcejeo mestizo por hacer valer la democracia en los gobiernos locales, tanto por la vía representativa y electoral, como por mecanismos de participación directa. Abordaremos ahora la trayectoria y saldos

del combate productivo, la silenciosa construcción de una economía moral que no espera al improbable triunfo “revolucionario” de la utopía. Y como veremos, lo más valioso y memorable de esta lucha también tiene al Sur como escenario y a los indios como protagonistas.

Un grano que te mantiene despierto

Los hombres del cafetal son los pequeños productores más y mejor organizados de México. La irrupción avasalladora del libre mercado desde fines de los ochenta y dos megacrisis de precios en menos de diez años, traen fintos a los cafetaleros del sector social, pero la mayor parte se mantiene organizada y al pie de la huerta. ¿Porqué un cultivo colonial impuesto por los finqueros y que por más de un siglo fue expoliador de los pueblos indios, en menos de veinticinco años devino bastión de la economía campesina organizada y autogestiva?

El maíz es entrañable, generalizado y de sus tallos pende la subsistencia, pero no ha tenido la misma trascendencia organizativa que el café. Y es que el del grano aromático es un cultivo mundializado y de enorme valor comercial, pero practicado mayoritariamente por campesinos pequeños y pobres. En esta combinación de riqueza descomunal y pobreza extrema, es donde está la palanca de la participación social: la penuria anima al sujeto, la riqueza mundializada aporta el escenario propicio. Otro factor de fecundidad organizativa es que el ámbito de los cultivadores es definitivamente local, pero el destino de la mayor parte del grano son los mercados mundiales, de modo que por poco que se despabile el cafetalero se encuentra inmerso en la globalidad, territorio donde lo acosan titánicos enemigos pero donde también encuentra insólitos aliados entre los consumidores. Además, el café se cosecha con sudor y se degusta con frío: es un cultivo tropical consumido mayormente en los países industrializados, que por su propia naturaleza enlaza al primer mundo con el tercero, a los huerteros más remontados con los consumidores posmodernos; cafeteros preocupados por evitar agroquímicos y por los pajaritos que anidan en las huertas con sombra, pero a veces también por la inequidad que aqueja a los productores. Tanto en África como en América Latina, el aromático es cultivado por millones de pequeños cosecheros, por lo general descendientes de los pueblos originarios, es pues un producto indio por excelencia, pero especialmente apreciado por los “blancos” de Europa del Norte y de los Estados Unidos y paulatinamente por los “amarillos” de oriente.

El café cotiza en la bolsa Nueva York mientras que entre los indios de la Sierra Juárez tiene valor moneda. Y es en la tensión entre pobreza y riqueza extremas, entre el ámbito local de los productores y el mercado globalizado, entre el origen en el trópico tercermundista y el destino en el primer mundo invernal, entre cosechadores “de color” y consumidores “blancos”, donde está una de las claves del potencial organizativo de la cafecultura social. Otra explicación es que el café es el

producto globalizado en el que por más tiempo se mantuvieron los acuerdos económicos internacionales. Regulaciones instrumentadas nacionalmente por institutos estatales, que con frecuencia fomentaron la pequeña producción y pastorearon técnica, financiera y comercialmente a los huerteros modestos, promoviendo una cierta organización clientelar. En el caso de México los agrupamientos inducidos por el Inmecafé, fueron germen de una generalizada organización autogestionaria, que al cancelarse los acuerdos internacionales y recular el Instituto, trató de ocupar los espacios abandonados. Y habiendo sido el café, durante las décadas de los acuerdos internacionales, un asunto de Estado, los pequeños productores se acostumbraron a negociar con el Leviatán, y aprendieron rápido que el destino del sector, como el de la agricultura toda, depende decisivamente de las políticas públicas.

La naturaleza tecnológica del cultivo es también propicia a las formas asociativas, pues por lo general las huertas están remontadas en la sierra, y el acopio, acarreo e industrialización primaria de un producto que si no se beneficia a tiempo y bien pierde valor, exigen infraestructura y organización. Si estas se encuentran en manos de los acaparadores privados favorecen la explotación y si las maneja el Estado son fuentes de corrupción y clientelismo. Así las cosas, a los campesinos no les basta con librarse de los acaparadores y desenbarazarse del paternalismo estatal, necesitan asumir colectivamente las funciones que estos desempeñaban.

Además, el grano aromático goza del favor de dios. Tanto en México como en Centroamérica, algunas de las experiencias organizativas más interesantes y consolidadas, fueron propiciadas inicialmente por la iglesia católica y agencias internacionales cristianas. Intervención que tuvo un gran papel en la creación del sistema internacional de labels y mercados equitativos, y fue decisiva en la introducción de paquetes tecnológicos sustentables. Así, el café es hoy el producto más importante en los mercados justos y en los cultivos orgánicos, que son tecnología de opción y laboratorio de comercio alternativo.

No sólo su capacidad organizativa, también su peso económico e importancia social hacen del aromático un paradigma alternativo para el Sur. Después de la milpa, la huerta cafetalera es el cultivo más socorrido entre los pobres del campo mexicano. Sobre 700 mil hectáreas, distribuidas en 12 estados, 56 regiones, 400 municipios y 4 mil localidades, más de 280 mil productores cultivan café. De estos el 92% tiene huertas de 5 hectáreas o menos y cerca de 200 mil trabajan minúsculos cafetales de menos de dos hectáreas. Pero además, el 65 % de los cultivadores del aromático son indígenas, unos 185 mil cafetaleros pertenecientes a 25 etnias; y el cultivo se ubica principalmente en los estados del sur-sureste, de modo que entre Chiapas, que es el mayor productor, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Guerrero, generan la casi totalidad de la cosecha.

Los campesinos toman poco y mal café, pero el aromático es un cultivo de primera

necesidad, una actividad económica socialmente necesaria en la que se ocupan cerca de 300 mil familias de productores directos, alrededor de un millón y medio de mexicanos, más cientos de miles de jornaleros estacionales que laboran durante la pizca. Así, en la fase primaria el café emplea del orden de un millón setecientas mil personas al año, que en los doce estados productores representan en promedio el 52% de la población rural laborante, proporción que es mayor en las entidades de mayores cosechas como Chiapas y Oaxaca. Considerando toda la cadena productiva el café sustenta unos tres millones de empleos.

Algunos lo consideran suntuario o cuando menos superfluo, pero por ocupación e ingreso generado el café es un grano básico, un producto de primera necesidad. Y es que en los setenta y ochenta las huertas del aromático se transformaron en cultivo de refugio para campesinos que ya no encontraban en la comercialización de los módicos excedentes milperos el ingreso monetario necesario para sobrevivir. Así, en esas dos décadas se duplica el número de productores, aun que las plantaciones sólo crecen en 60%, lo que significa que el tamaño medio de las huertas disminuye; mientras que las cosechas aumentan 70% durante todo el lapso, lo que representa un insignificante 0.5% anual de incremento de los rendimientos. Desde los cincuenta, cuando la fuerte demanda de la posguerra lo hace atractivo, y sobre todo de los setenta a los ochenta, cuando el Inmecafé lo fomenta, el del aromático deviene un cultivo señaladamente campesino e indígena. Pero se trata de una producción de rendimientos estancados, creciente pulverización y cada vez más polarizada, pues 270 finqueros de altos rendimientos relativos, con cientos de hectáreas cada uno, concentran el 7.1% de la superficie cafetalera total.

Cultivo de refugio y socialmente necesario, el grano aromático se inscribe también en un proceso productivo de naturaleza campesina, pues en lo económico se asocia con el maíz en estrategias de sobrevivencia autoconsuntivo-comerciales, y en lo técnico se maneja en huertas con sombra y diversificadas, lo que algunos llaman policultivo tradicional. Al influjo de la lógica mercantil, pero sobre todo por inducción del Instituto, las estrategias cafetaleras campesinas se habían venido desgastando a favor del monocultivo e incluso de las plantaciones a sol. Pero no hay mal que por bien no venga, y las megacrisis iniciadas a fines de los ochenta y fines de los noventa, demostraron que poner todos los huevos en una misma canasta era un mal cálculo, con lo que regresaron por sus fueros la milpa de auto abasto, los animales de traspatio y la huerta diversificada. Y en una segunda vuelta de tuerca, en los últimos años las practicas tradicionales han comenzado a dejar paso al cultivo ecológico y sustentable, que bien visto resulta una forma superior del manejo campesino. La tendencia es intensificar y racionalización la vieja huerta diversificada o de plano a organizar policultivos comerciales, y sobre todo a sustituir agroquímicos por prácticas de manejo e insumos no contaminantes.

Por múltiples razones de carácter ambiental, técnico, económico y comercial, pero también por sus virtudes organizativas y su ubicación en redes solidarias internacionales, el cultivo orgánico es una verdadera revolución que avanza en el sentido de una modernidad alternativa. Y es en el café donde más ha progresado, pues de las poco más de 100 mil hectáreas de cultivos orgánicos que hay en México, casi 70 mil están ocupadas por cafetales. Ciertamente por partir de cero, la agricultura ecológica a tenido un crecimiento acelerado: en 1996 había 23 mil hectáreas, que para el 2000 ya eran 102 mil, distribuidas en 262 zonas. Los conversos son principalmente campesinos: el 84% de la superficie certificada es del sector social, el 98.5% de las unidades tiene en promedio dos hectáreas y el 50% de los agricultores orgánicos es indígena. El café representa el 70% de estos cultivos, seguido muy atrás por el maíz y el ajonjolí, con 4% cada uno, y por pequeñas superficies de frijol, manzana, aguacate, mango y plantas medicinales. El manejo sustentable de los recursos naturales y la agricultura ecológica, son parte de la lucha campesina y constituyen lo que Víctor Toledo ha llamado una “revolución centrípeta”, que va del mundo rural e indígena a las metrópolis industrializadas. “Un primer recuento de estas experiencias -escribe el biólogo- arroja casi una veintena de iniciativas notables, las cuales movilizan a unas dos mil comunidades rurales, principalmente en las porciones central y sur del país... El grueso de estas luchas, su columna vertebral, lo forman sin duda las comunidades forestales y las cafetaleras”

Sin duda la cafecultura mexicana tiene severos problemas. Con el fin de los acuerdos económicos de la OIC se desbordaron en el mundo las plantaciones y actualmente hay una fuerte sobreproducción que derrumba los precios, un puñado de transnacionales alimentarias controla el mercado e impone su lógica y cotizaciones, que además están sujetas a la especulación pues el grano está bursatilizado, por si fuera poco nuestra cafecultura es altamente ineficiente y una parte de las huertas campesinas está en zonas inadecuadas para el cultivo. Aun así, los cafetales mexicanos son estratégicos, por que el grano es el principal producto de exportación después del petróleo, pero sobre todo por que su cultivo es prioritario socialmente hablando y sin duda conforman la producción netamente comercial de la que más personas dependen. Además, la cafecultura es una labor de campesinos pobres, mayoritariamente indígenas y altamente organizados, que está viviendo una intensa revolución tecnológica; un cultivo que se practica en el centro sur de la República y que tiene una enorme importancia en la economía de casi todos los países centroamericanos. En estas condiciones podríamos suponer que el café del sector social será de los ejes mayores del PPP y del PSS, y que el dialogo con las organizaciones de los pequeños productores del aromático constituye una de las prioridades de la concertación social de los planes y proyectos. No es así. Al contrario, los planteamientos del mayor teórico del gobierno, representan una amenaza expresa al campesinado cafetalero y un explícito rechazo al modelo económico,

técnico y social que ha puesto en pie.

En el estudio ya mencionado, Santiago Levy dice: “...el sureste... tiene condiciones adecuadas para productos cuyo cultivo más eficiente se da en el contexto de una agricultura de plantación; es decir una agricultura caracterizada por amplias extensiones donde se cultiva, en forma tecnificada, un producto de tipo perenne (no de ciclo anual): café, plátano, azúcar, palma africana y productos maderables, entre otros,... agricultura de plantación... (que)... se desarrolla mejor por parte de agentes económicos dotados de amplios recursos financieros”. Este es el retrato hablado de las *Plantagengerellschaft* alemanas y otras fincas transnacionales, que durante el porfiriato colonizaron el sureste, saqueando sus recursos naturales y transformando a los indios en esclavos de entrada por salida. Las plantaciones de Levy son lo opuesto al modelo campesino, que se desarrolla en pequeña y mediana escala, dentro de una estrategia económica diversificada, en huertas de sombra con cultivos múltiples -no “tecnificadas” en el sentido clásico-, y que mediante la asociación logra las escalas necesarias para organizar con eficiencia tanto el financiamiento y la renovación tecnológica como la industrialización y el mercadeo. Una cafeticultura que, en la lógica neoliberal de los tecnócratas, debiera dejar paso a vertiginosas plantaciones especializadas y “tecnificadas”, en manos de “agentes económicos de amplios recursos financieros”; modelo colonial que en lo técnico es no sustentable mientras que en lo económico resulta expoliador y excluyente.

Frente a esto, mi hipótesis de trabajo es que el manejo cafetalero de los campesinos organizados es económicamente viable y tiene una eficiencia social y ecológica infinitamente superior al modelo de plantación; creo también, que el paradigma implícito en la cafeticultura campesina, se puede trasladar, con adecuaciones, a muy diversas actividades productivas; sostengo, por último, que tropezando y a contracorriente, la cafeticultura en asociación es una parcela demostrativa de la economía moral: una producción y distribución autogestionarias y con vocación de equidad, que sería el sólido reverso de la socialidad libertaria que buscan los pueblos indios y otros mexicanos del común. En abono de estas hipótesis, los siguientes apartados documentan la experiencia organizativa de los indios cafetaleros del sureste.

La hora del café

Siendo el del aromático un cultivo históricamente finquero, las primeras organizaciones de productores son empresariales. En 1954 se forma la Unión Agrícola de Cafetaleros, luego Confederación Mexicana de Productores de Café, que hoy representa a unos 5 500 agricultores, agrupados en asociaciones agrícolas y uniones de productores. Más tarde se constituye la Unión Nacional de Productores de Café, asociada a la Confederación Nacional de Productores Rurales,

que hasta 1986 representaba a unos 20 mil cafecultores y ahora agrupa a menos de tres mil. Y como el grueso de las huertas campesinas aparece en el último cuarto de siglo y cobijado por Inmecafé, los primeros agrupamientos del sector social son corporativos, como la Federación Nacional de Productores de Café, fundada en 1977 y afiliada a la CNC. Pero la primera organización cafetalera de cobertura prácticamente universal son las unidades económicas de producción y comercialización (UEPC), promovidas por el Instituto para operar los anticipos a cuenta de cosecha, concentrar el acopio del grano y canalizar el pago inicial y los finiquitos. Para el ciclo 1986-87, poco antes de la desincorporación de Inmecafé, el 85% de los productores, dueño del 76% de la superficie con huertas, está encuadrado en alguna UEPC. Pero para ciertas actividades las UEPC resultan insuficientes, y desde los últimos setenta comienzan a formarse uniones regionales de ejidos cafetaleros, que si al principio tienen como principal contraparte al Instituto, pronto comienzan a asumir responsabilidades económicas. Privilegiada por el gobierno en la operación de créditos y cuotas de exportación, la CNC crea primero numerosas uniones de ejidos y después asociaciones rurales de interés colectivo (ARIC), la primera de las cuales opera en Veracruz. A partir de la Asociación de Misantla se constituye la ARIC nacional, con 16 organizaciones regionales de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Así, desde fines de los años setenta la mayoría de los cafetaleros está agrupada en UEPC, muchos se encuadran en uniones y asociaciones regionales y algunos participan en una asociación nacional con gran capacidad financiera, industrial y exportadora. Poco mérito, en realidad, pues casi todas estas organizaciones son prolongación de la administración pública; aparatos económicos paraestatales, que de paso cumplen funciones corporativas y clientelares.

La organización cafetalera autónoma nace en realidad a fines de los setenta, cuando agrupamientos independientes como las uniones de ejidos Kiptik ta Lecubtesel, Lucha Campesina y Tierra y Libertad, de Chiapas, y la Alfredo V. Bonfil, de Guerrero, junto con la Unión de Productores de Café, de Veracruz, emprenden luchas regionales contra la torpeza y deficiencias del Instituto, acciones que en los primeros ochenta se transforman en amplia y combativa movilización nacional. De exigirle soluciones al gobierno, las organizaciones pasan a definir y ejecutar proyectos autogestionarios, en un viraje al que algunos llaman “cambio de terreno” y que diluye la incipiente coordinación nacional, volcando la atención de los agrupamientos a sus respectivas zonas. Así, durante los ochenta se consolidan numerosos núcleos cafetaleros que van desarrollando aparatos económicos propios: sistemas de acopio y comercialización, equipo agroindustrial para el beneficiado primario y eventualmente la torrefacción, sistemas financieros, entre otros; todo dentro de la estrategia llamada “apropiación del proceso productivo”. En esta etapa introspectiva, cada una de las regiones cafetaleras define estrategias diferenciadas, que responden a su historia y contexto

específico. Los huerteros mestizos del centro de Veracruz, por ejemplo, son cafetaleros campesinos de tradición, fuertemente especializados y de altos rendimientos, que habitan una zona bien comunicada y con servicios financieros; para ellos lo importante es dotarse de infraestructura para el beneficio del grano e intentar la exportación directa, no necesitan sistemas crediticios propios y dependen poco de Inmecafé. En cambio, los de Chiapas y de Guerrero son cafetaleros más recientes y de bajos rendimientos, ubicados en zonas mal comunicadas, cuyas prioridades son pasar de los patios de secado al beneficiado húmedo, que no tienen financiamiento bancario por lo que forman uniones de crédito, y que aun dependen fuertemente del Instituto. Enfrascados en la tarea de edificar aparatos económicos eficientes y ser “buenos empresarios”, los huerteros organizados participan poco en las nuevas luchas nacionales por los precios, como la del ciclo 1986-87, que impulsan casi exclusivamente los cafetaleros de la CIOAC veracruzana y algunos grupos de la CNC.

Y cuando los proyectos económicos autogestionarios calientan motores para despegar y la emancipación librecambista de los campesinos parece inminente, se cancelan los acuerdos económicos de la OIC, se abisman los precios del café y el Instituto emprende la retirada. Se trata, en verdad, de un choque con el capitalismo salvaje realmente existente, conmoción que en el caso del café corresponde con un viraje histórico: el tránsito de una prolongada regulación internacional que al mantener los precios relativamente altos dio seguridad a las naciones consumidoras pero en gran medida benefició económicamente a los países productores, a un sistema de libre mercado en realidad sometido a las transnacionales agroalimentarias y a la especulación de la bolsa, cuyo primer efecto es la caída de las cotizaciones y el desmantelamiento de los aparatos de intervención económica estatal en la cafecultura. La primera turbonada del vendaval barre con la ineficiente, subsidiada y corrupta organización económica de la CNC. Y en el bando de los autónomos, paradójicamente golpea con mayor fuerza a los mas eficientes y avanzados, los cafetaleros veracruzanos que habiendo adquirido a crédito beneficios industriales tienen que enfrentar los malos precios y el alza de las tasas de interés, y que como productores especializados no tienen otros ingresos agrícolas, ni pueden dejar que las huertas se enmonten esperando tiempos mejores.

En las crisis uno se acuerda de los amigos, y a fines de los ochenta los agrupamientos cafetaleros, zarandeadas en sus regiones, restauran las relaciones nacionales que cuatro años atrás habían dejado enfriar. En julio de 1989 se realiza en Oaxaca el Primer Encuentro Nacional de Organizaciones Cafetaleras, con 25 agrupamientos de seis estados, que firman un Convenio de Unidad de Acción. El mismo año se realiza un segundo encuentro, esta vez en Veracruz, al que asisten las mismas organizaciones y más de cien UEPC de ese estado. Producto de los encuentros es la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), fundada en Julio de 1989 en Lachiviza, Oaxaca, y donde participan, entre otras, la ARIC Unión de Uniones y la Unión de

Crédito Pajal Yakiltik, de Chiapas; la Coalición de Ejidos de la Costa Grande de Guerrero; la Unión de Productores de Café de Veracruz; la Tosepan Titataniske, de Puebla; la Unión Campesina Independiente, Cien años de soledad (UCI 100 años), la Unión Campesina Independiente de la Región del Istmo (UCIRI), la Unión Campesina Independiente de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) y Pueblos Unidos del Rincón, todas de Oaxaca; la Cooperativa Amanecer del Pueblo, de Tabasco y grupos cafetaleros de la CIOAC. La CNOC es una red de organizaciones de productores, pero en cierto sentido es también una coordinadora pluriétnica de agrupamientos indígenas, sin duda la más grande y beligerante que hubiera existido en el país. “Una gran mayoría somos indígenas –dice la CNOC en un folleto de divulgación- , habemos: tzotziles, tzeltales, tojolabales, choles, huastecos, nahuas, totonacas, tlapanecos, mazatecos, zapotecos, mixtecos, chinantecos, triquis, entre otros”.

En la CNOC confluyen dos tendencias del movimiento campesino, la que encarna en CIOAC, una coordinadora fundada, y por muchos años impulsada por militantes del Partido Comunista, y la mayoritaria conformada por organizaciones vinculadas a UNORCA, que por entonces vivían en luna de miel con el Estado, gracias a su cercana relación con el grupo del presidente Carlos Salinas. Así, la coordinadora nace en el contexto ideológico de lo que he llamado la “emancipación librecambista”, y en su arranque coquetea con el “nuevo movimiento campesino”, prohijado por la una tendencia renovadora de la CNC encabezada por Hugo Araujo. El “nuevo movimiento...” es una corriente que no pretende integrar organizaciones sociales –a las que se presume por definición contestatarias, rijosas y clientelares- sino “redes de empresas sociales y ramas de producción”; y que converge con la política privatizadora y desreguladora que impulsa el gobierno, en la que ve una oportunidad de que los campesinos alcancen la “mayoría de edad”, mediante la apropiación gerencial de las empresas y actividades económicas abandonadas por el Estado.

Sin embargo, más allá de las filiaciones, la CNOC es un frente realmente plural y constituido por efectivas organizaciones de base, que de inicio define su propia política. Prácticamente desde su fundación la coordinadora deviene principal interlocutor del gobierno en la firma del Convenio de Concertación para el Cambio Estructural de Inmecafé, donde se establece que las organizaciones de productores asumirán las funciones de crédito, acopio, beneficio y comercialización, para lo cual el Instituto deberá transferirles 33 beneficios húmedos, 12 beneficios secos, 31 almacenes y otras instalaciones. En esta línea, las organizaciones de CNOC fundan la Promotora Comercial de Cafés Suaves Mexicanos, S.A. de C.V., con el fin de apoyar exportaciones, y para comercializar directamente en EEUU registran la marca Aztec Harvests. Sin embargo el financiamiento es una palanca decisiva que el sector cafetalero post Inmecafé no logra

restablecer, pues los programas de habilitación con recursos gubernamentales, como el crédito en dólares de 1994, fracasan, en parte debido al cambio coyuntural en la paridad monetaria, pero también por el clientelismo de la CNC y la lógica contestataria de algunas organizaciones independientes, quienes coinciden en promover el no pago, unos por que son del PRI y se ponen a mano con votos y otros por que no lo son y se cobran a lo chino la deuda histórica del Estado con los campesinos.

La crisis generada por los precios bajos y por la desregulación estatal dramatizada en el desmantelamiento de Inmecafé, no tiene un aterrizaje suave, y pese a que entre 1989 y 1994 CNOC y otras organizaciones se movilizan y negocian intensamente, en casi todas partes la cafecultura social naufraga o hace agua. Pero así como en 1974 la caída de los precios del aromático y la presencia del alzamiento armado del Partido de los Pobres en la zona cafetalera de la Costa Grande de Guerrero, impulsaron el embarcamiento del Inmecafé; en 1994, la prolongada desvalorización del grano, la emergencia del EZLN y el hecho de que el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC), de Chiapas (formado al calor de la insurrección), ponga en primer plano la problemática del café, se combinan con la presión de la CNOC, para precipitar un multimillonario programa gubernamental. De esta manera, el convulso periodo de transición, caracterizado por ínfimas cotizaciones, desmantelamiento de los aparatos económicos del Estado, poco exitosos programas gubernamentales, protagonismo creciente de la Coordinadora y rebeliones armadas en zonas cafetaleras, termina simbólicamente en 1994, con la entrega a los productores de un subsidio directo de \$700 por hectárea, con posibilidad de inscribir hasta cuatro; una derrama clientelar y electorera de alrededor de 400 millones, con la que se pretende contentar a la CNOC y sus agremiados, enfriarle el agua a la guerrilla y colaborar a que el PRI gane las elecciones por la presidencia, que se celebran ese mismo año.

Para superar el desencuentro histórico será necesario comprometer la lucha libertaria con proyectos de desarrollo viables, pero también politizar la autogestión económica para incorporarla a la libre determinación democrática. Y la clave de esta insoslayable reconciliación son los indios. Por que resulta que en el tránsito de los milenios, los mayores protagonistas del combate por las libertades políticas rurales fueron los indios del Sur, y también son indios y sureños los animadores de las mayores luchas por la equidad económica.

De este reencuentro depende en gran medida la capacidad del pueblo mexicano para resistir y enfrentar las políticas mercadócratas con que el gobierno de la alternancia prolonga los designios neoliberales del anterior. Y la misma convergencia es necesaria para hacer frente al Plan Puebla Panamá con propuestas alternativas y viables, sostenidas por fuerzas populares que estén a

la altura del desafío. Porque si los proyectos de los gobiernos son multinacionales, también tendrán que serlo los actores sociales capaces de resistirlos.

No es tarea imposible. Ya hemos visto más arriba que además del modito de andar y el aire de familia, los pueblos de la América de en medio tenemos grandes afinidades y hemos animado movimientos y luchas semejantes. Dijimos ahí que en casi todos los países centroamericanos se escenificaron importantes combates agrarios y que muchos comparten con el sureste mexicano una fuerte presencia de los pueblos originarios. Recordemos, para terminar, que prácticamente todos sustentan su economía en la cafecultura, sector que en la región genera anualmente un millón doscientos mil toneladas, representa entre el 20 y el 50% de las exportaciones y se extiende sobre En 1994 fenecen tanto el sexenio como la credibilidad de Carlos Salinas. Y con ello se agota la alianza del “nuevo movimiento campesino” con el gobierno, para impulsar un proceso donde el desafane rural del Estado y la liberación del mercado debían emancipar a los pequeños productores agrícolas transformándolos en eficientes empresarios. Los documentos del Primer Congreso de la CNOA, celebrado en junio de 1994, en Oaxaca, registran tanto el nuevo escepticismo ante la libre competencia, como las conclusiones que sobre los intensos acontecimientos recientes extrae la que en ese momento es el agrupamiento campesino más sólido del país... y de soslayo también la organización indígena más extensa: “La explosión chiapaneca demostró...primero... (que)... las intentonas de modernizar al sector rural a “golpes de mercado”, de drenar la población rural..., tarde o temprano provocan inestabilidad,...(así)... cualquier política de modernización en el futuro debe partir de considerar que los campesinos existen y que pretender cintura al mercado e imponer una cierta “economía moral” (Edward Thompson), supone una enérgica presión popular. Movilización ciudadana donde se van forjando sujetos sociales que si ahora animan esta lucha, con el tiempo quizá impulsarán más ambiciosos proyectos justicieros.

Otra aportación de UCIRI a la nueva estrategia cafetalera es la introducción en el sector de los pequeños productores del manejo orgánico de las huertas. El cultivo del grano aromático sustituyendo los fertilizantes químicos por compostas y abonos verdes y los pesticidas por el control prescindir de ellos tendrá un enorme costo político y social. Segundo... la estrecha relación que existe entre la lucha rural y la democratización política del país. Aunque las presiones para avanzar a una democracia plena ya estaban presentes... la insurgencia indígena y campesina los extendió y amplificó... Tercero... la profunda imbricación... entre las demandas rurales y la cuestión étnica. A lo largo y ancho de todo el país, la recuperación de la etnicidad por parte de multitud de pueblos indios ha roto con una visión culturalista... impuesta por el Estado y ha puesto en el centro del debate nacional la cuestión de la autonomía y el autogobierno”.

No lo dice una organización testimonial o una central de membrete. En ese año se elabora

el primer padrón confiable de cafetaleros, y la CNOC demuestra que tiene detrás a 66 mil productores efectivos, mientras que la oficialista UNPC de la CNC, dice representar a 86 mil y las empresariales CMPC y CNPR agrupan a 5 500 y 2 800 respectivamente. Pero 1994 es también el año de mayor militancia y presencia nacional de la coordinadora, pues desde 1995 los precios del grano aromático se recuperan y el gobierno define una nueva política cafetalera, consistente en promover la renovación de las huertas, subsidiando la producción y establecimiento de plantas. Programa que se aplica descentralizadamente a través de los consejos estatales del café, y en la mayor parte de los casos conduce a la negociación bilateral de cuotas por parte de cada una de las organizaciones, que se transforman así en simples operadoras de recursos fiscales. Con todo, la CNOC y sus afiliadas enfrentan mejor que otras las nuevas condiciones, y Fernando Célis, experto en el asunto, calcula que para el año 2000 la Coordinadora aun representaba a unos 50 mil productores, mientras que entre la CIOAC, dividida en dos fracciones, la Unión General Obrero Campesino Popular (UGOCEP), la Unión nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), y otros núcleos independientes, agrupaban a otros 25 mil; por su parte la CNC conservaba alrededor de 60 mil de sus casi 90 mil productores, y los dos coordinadoras empresariales se habían dividido y perdido representatividad.

A partir de 1998 los precios del café entran otra vez en picada cayendo hasta los 60 dólares las cien libras, cuando para un productor medio la cotización mínima para no tener pérdidas es de 100 dólares, por si fuera poco el café mexicano sufre castigos de hasta 30% sobre el precio de bolsa y el peso está sobrevaluado. Y de nueva cuenta la crisis fortalece la convergencia nacional. Desde ser rentable, no sólo por el nivel de los precios, sino principalmente por sus severas fluctuaciones. La huerta se ha convertido en una herencia incómoda que sólo se mantiene en espera de tiempos mejores -que posiblemente no vendrán y en todo caso no serán duraderos- y por que permite acceder a los subsidios del Programa de Empleo Temporal y de Alianza para el Campo. Esta es la amarga perspectiva de quienes se quedaron en la lógica de las viejas estrategias del Instituto. Pero hay otro sector, cada vez más numeroso, que busca y encuentra opciones tecnológicas y de mercado y que, creyendo en el café, no se lo juega todo al café e impulsa la diversificación productiva. Este nuevo movimiento cafetalero no está formado por los núcleos estructurados a fines de los setenta y principios de los ochenta y que animaron las luchas precursoras, sino por agrupamientos mas recientes; una nueva generación de cafetaleros organizados que se caracteriza por tener huertas muy pequeñas y un talante marcadamente indígena, pero que ha puesto en pie organizaciones fuertes capaces de combinar eficacia técnico-económica y legitimidad social.

Café con piquete

Los fetichistas de la libre competencia pensaron que con la desregulación los cafetaleros se iban a “modernizar”, que “a golpes de mercado” los productores más modestos y diversificados desaparecerían dejando su lugar a verdaderos empresarios de la cafecultura. No fue así. En la crisis de precios los más afectados fueron los mal llamados “transicionales”, huerteros pequeños y medianos pero especializados, que dependían exclusivamente del café y tenían gastos productivos insoslayables. En cambio, los cafecultores diversificados, con huertas ínfimas y manejo tradicional, intensificaron su labor en otras áreas de la producción por cuenta propia y en el trabajo a jornal, y dejaron enmontar el cafetal en espera de tiempos mejores. A todos les fue como en feria, pero las estrategias campesinas resultaron más eficaces que las empresariales para capotear el vendaval.

En vez de la esperada “reconversión” empresarial, la crisis generó una suerte de recampesinización de las estrategias cafetaleras. Muchos de los pequeños huerteros, que en los años de precios relativamente buenos y menos inestables respondieron al canto de sirena de Inmecafé, especializándose e incrementando su dependencia de los agroquímicos y del pago de jornales, en los noventa restablecieron sus siembras de maíz para el autoconsumo y buscaron otras opciones productivas comerciales. Frente a la exclusión salvaje operada por las inclemencias del mercado, las tácticas campesinas basadas en lógicas de producción no empresariales operaron como mecanismos de inclusión. En una suerte de feminización de la economía doméstica, la intensificación del solar, del traspato y de los básicos de autoabasto, se reforzó con la migración estacional o más prolongada de los varones adultos de la familia, abriéndole una puerta a la sobrevivencia. Pero lo más importante es que las estrategias campesinas pasaron de lo doméstico a lo asociativo y fueron adoptadas también por las organizaciones de productores.

Paradójicamente los más golpeados fueron los agrupamientos de buenos cosechadores del centro de Veracruz y de huerteros comparativamente grandes de la Costa Grande de Guerrero, unos y otros mestizos y más o menos especializados, y no los núcleos de productores indígenas muy pequeños y diversificados de Oaxaca y Chiapas. Y es que la segunda generación de organizaciones cafetaleras autónomas, nacida en la inminencia de la crisis de 1989-93 o durante ella, ya no se deslumbra con el espejismo que dejó a los precursores veracruzanos y guerrerenses endeudados y con instalaciones agroindustriales subutilizadas, y a falta de precios asegurados y cuotas de exportación, opta por la reconversión productiva y la búsqueda de nichos de mercado. Pero incursiona también en la diversificación, tanto doméstica y comunitaria como de mayor escala. Porque en la nueva cafecultura social, la clave del éxito está tanto en la integración vertical de la cadena productiva, como en la articulación horizontal de los agricultores; en el fortalecimiento del

sistema producto pero también en el impulso y racionalización de la diversidad; en insertarse bien en el mercado externo y al mismo tiempo aprovechar a fondo las posibilidades del mercado local; en combinar la agroexportación más agresiva con el autoconsumo; en asumir que el café puede ser medio de pago en los intercambios locales -como lo fue el cacao antes de la conquista-, al tiempo que se cotiza en lo bolsa de Nueva York. Y es que la combinación de lo global con lo local está en la naturaleza misma del grano.

Las nuevas estrategias cafetaleras también son relevantes y paradigmáticas en un sentido más amplio, porque la debacle del aromático es sólo parte de la crisis general del campo. La apertura comercial negociada como parte del TLCAN únicamente favoreció a la exportación de hortalizas, pero reventó la producción nacional de granos básicos y generó una creciente dependencia alimentaria, al extremo de que terminamos el siglo importando alimentos por el mismo valor que nuestras exportaciones de petróleo. Complemento de esto es la reducción de los ingresos campesinos y los empleos locales, que se expresa en la autoexportación de los trabajadores; en un incontrolable éxodo rural a las ciudades, a los campos agrícolas del noroeste y a los Estados Unidos. La pérdida de la soberanía alimentaria y la pérdida de la soberanía laboral, son los dos clavos que nos fijan en la cruz de la dependencia perversa. Y digo perversa por que no todas lo son; porque no es lo mismo negociar soberanía a cambio de interdependencia virtuosa en la Unión Europea, que depender absolutamente y de un solo país en dos renglones vitales y no negociables: alimentación y empleo. La muchedumbre de migrados que envía dinero de regreso y los subsidios gubernamentales, que son de carácter asistencial y en la práctica dirigidos al consumo, están transformando muchas comunidades en una suerte de pueblos “dormitorio”, con mínima actividad productiva y absolutamente dependientes de recursos del exterior. Y es que las remesas de la muy solidaria raza trasterrada son algo serio: cinco mil millones de dólares al año; cinco veces la erogación de Procampo, dos veces el presupuesto de la SAGARPA.

Las respuestas del nuevo gobierno a esta debacle, formuladas por el Equipo de Transición y que no han sido desmentidas por el nuevo secretario de agricultura, son las fórmulas tripartitas de siempre: a los empresarios “un ambiente de negocios que les brinde seguridad y rentabilidad”; a los eternos transicionales, (si es que queda alguno por que la mayoría ya transitó al sótano campesino) “transformación del productor tradicional en pequeño y mediano empresario”, es decir la ilusión de la vía changarrista: muchos son los llamados ninguno el elegido; y para los desahuciados, “imposibilitados para transitar por sus propios medios hacia una economía de mercado”, un reconocimiento más claro que en el pasado a que su destino es el drenaje poblacional. Pero como el espejismo de emplearse en una industria que supuestamente crecería por encima del 7% no se cumple, los foxistas admiten como destino “la venta de servicios personales a pequeñas industrias

rurales, en empresas agrícolas en el país o en el extranjero”, es decir la condición de *golondrinos* o *mojados* como único destino. Ya lo dijo el ahora presidente Fox cuando pastoreaba a los guanajuatenses: más les vale estudiar jardinería para así encontrar trabajo en las residencias de los gringos. Y si el viaje es peligroso no importa, en mayo de 2001 la Oficina de la Presidencia Para la Atención a Migrantes les prometió a los peregrinos y peregrinas del “sueño americano” una cajita con pastillas anticonceptivas o con veinticinco condones, además de aspirinas, antidiarreicos, vendas, atún, carne seca, granola y su bendición. Lamentablemente la presidencia se arrepintió –o la arrepintieron las presiones estadounidenses- y los mojados tendrán que seguir cruzando sin el *kit* de supervivencia que ya habían bautizado como “cajita feliz”.

Por fortuna hay otras salidas. En vez del panorama de nebulosos empresarios agrícolas y efectivos migrantes desarraigados, que nos pinta el gobierno, las organizaciones cafetaleras tienen un proyecto incluyente; sin duda un proyecto modernizador, pero también de talante campesino.

El caso de Oaxaca es aleccionador. En esa entidad la cafecultura tuvo un crecimiento explosivo, pues de los 14 mil productores y 62 mil hectáreas que había hace poco más de veinte años, se pasó a 58 600 productores y 180 239 hectáreas en la actualidad. Y la abrumadora mayoría de los nuevos huerteros es indígena, al extremo de que el café es principal cultivo comercial de once de los dieciséis grupos étnicos de la entidad: zapotecos, triquis, mixes, chinantecos, chatinos, chontales, zoques, mixtecos, tacuates, cuicatecos y mazatecos. Además, los cafetales son muy pequeños: el 88% tiene cinco hectáreas o menos y dentro de este sector 35 mil huertas son de menos de dos. Si consideramos, por último, que los rendimientos son bajos; cuatro quintales por hectárea en promedio y una cantidad menor en el caso de los más pequeños, es claro que el café no basta para alcanzar en nivel de subsistencia y los huerteros indígenas son también milperos, ganaderos de traspatio, recolectores, jornaleros.

En Oaxaca el proceso de organización autónomo, no corporativo ni paraestatal, se acelera a mediados de los ochenta. Uno de los primeros agrupamientos es la Unión Campesina Independiente de la Región del Istmo (UCIRI), que nace en 1983 con el respaldo de la Diócesis de Tehuantepec, comunidades cristianas de base y organismos solidarios europeos. Los zapotecos, mazatecos, chontales y mixes que integran la unión, incursionan pronto en el mercado mundial, pues desde 1985 exportan a Holanda y más tarde a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Italia, Alemania y Japón. Y pese a los apoyos solidarios que los cobijan, desde el principio UCIRI define su línea de acción: “Comercio, no asistencia”... “No necesitamos limosnas, preferimos vender a buen precio nuestro café”. Planteamiento claro, pero difícil de materializar, que sin embargo se transforma en la idea fuerza del “comercio justo” y poco después la Unión es cofundadora del label *Max Habelaar*, cuya certificación permite que los productores pobres y organizados que operan sin intermediarios

en cooperativas democráticas y equitativas, puedan acceder a mercados alternativos que pagan sobreprecios; pilones significativos sobretodo cuando se desploman las cotizaciones en el mercadeo convencional.

“Comercio justo” es un oximorón, una fórmula contradictoria. Porque justicia es un valor social, y por definición el mercado es insensible a toda consideración ética. Pero es un oximorón fértil y sugerente, pues dramatiza la necesidad de domesticar el librecambio, de ponerle bozal a la desfachatada libre concurrencia. Y esto es posible, en escala relevante pero restringida, cuando el intercambio tiene como base una comunidad capaz de ponerse de acuerdo sobre el valor de las cosas, tomando el precio como referencia pero manteniendo al valor de uso como criterio principal. Y en este caso lo que se pondera no es sólo el valor de uso inmanente, sino también los valores sociales que animan a la comunidad de productores y la comunidad de consumidores. El contrasentido de un comercio socialmente equitativo, cobra materialidad por que, además de organizaciones cafetaleras tercermundistas hay consumidores organizados del primer mundo. Y desde 1988 trabaja para ellos en Holanda y Suiza, *Max Havelaar*; en Alemania, Austria, Italia, Luxemburgo y Japón, *Trans-Fair*; en Inglaterra e Irlanda el organismo supervisor es *Fair Trade Foundation* y en Estados Unidos y Canada opera desde 1986 *Equal Exchange*, y también *Ten Thousand Villages* y *Justus!*. En la actualidad hay 17 sellos de comercio justo, agrupados en redes como la Federación Internacional para el Comercio Alternativo y la Asociación Europea de Comercio Justo o la *Fair Trade Labeling Organisation International*. Desde 1999 opera también Comercio Justo México A. C., donde participan, además de UCIRI, otras organizaciones cafetaleras de Oaxaca y Chiapas, la coordinadora nacional del sector y organismos como la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio. La Federación actúa en 45 países del Sur y canaliza café, té, azúcar, plátano, miel, cacao, nueces, especias y artesanías, producidas por alrededor de 800 mil familias.

No es el paraíso. El mercado justo es un nicho minúsculo al que pocos pueden acceder, su crecimiento fue importante pero se ha hecho más lento y tiene fuertes costos de transacción sufragados mayormente con trabajo voluntario, la certificación cuesta y cuando hay que obtener varias para acceder a distintos mercados puede resultar incosteable, y a fin de cuentas resulta que en algunos aspectos se comporta como cualquier mercado, por que siendo mayor la oferta que la demanda, los productores compiten por el acceso y finalmente la calidad del producto es la que abre las puertas al sobreprecio justiciero. Pero estos asegunes son virtud, pues nos hablan de un proyecto realista, que seguirá siendo útil para algunos, además de paradigmático e inspirador para todos, en la medida en que se contamine todo lo que haga falta del mercado, pero mantenga vivos sus principios y valores. Y en esta línea, una de las experiencias más importantes fue la reciente

incorporación de algunos de los criterios del comercio justo en el mercado masivo convencional, cuando la empresa estadounidense *Starbucks*, líder del café gourmet en ese país, agregó a las 30 variedades que oferta, la del grano certificado como justo, de tal manera que ahora en 2 300 puntos de venta de la unión americana, la justicia se vende junto a la altura, la baja acidez y las diversas denominaciones de origen. No fue fácil. Pese a que *Starbucks* promueve su imagen como “compañía responsable”, y en 1996 publicitó un Código de Conducta que incluye salud ambiental, pero también condiciones laborales dignas para los productores, el hecho es que se trataba se simple mercadotecnia. Fue necesario que en 1999 *Equal Exchange* realizará una intensa campaña con activistas que informaban a los parroquianos de los cafés, y sobre todo que se difundiera por televisión un documental que mostraba el mal trato a los trabajadores en una de las fincas guatemaltecas abastecedoras de *Starbucks*, para que la empresa por fin negociara y en septiembre del 2000 firmara un comunicado de prensa donde se compromete a comercializar café justo. Desde que en la Edad Media los pobres se rebelaban para bajar los precios del trigo, es claro que meter en biológico, se introdujo desde hace varias décadas en la finca chiapaneca Irlanda, pero es la unión istmeña quien en los ochenta incorpora esta tecnología a las huertas campesinas. El cultivo orgánico, mediante el que se pueden lograr rendimientos de hasta cuarenta y cinco quintales de café por hectárea, no es un regreso a la huerta natural, es una revolución tecnológica que supone conocimientos, disciplina y trabajo. Pero es un avance científico convergente con la originaria racionalidad técnica de los campesinos, antes de que cayeran fueran seducidos por el consumismo de agroquímicos que inducen las empresas fabricantes. Y además, forma parte de las tecnologías ecológicas orientadas a la sustentabilidad. Procedimientos perversos, en la óptica de un capital que no sólo es depredador, sino que también promueve la absoluta la homogeneidad tecnológica, única compatible con un sistema de mercado donde bienes iguales, que tienen precios iguales, deben que generarse con tecnologías iguales. Hoy sabemos que la naturaleza no es emparejable y que su aprovechamiento sostenido supone adecuar las técnicas a la diversidad de los ecosistemas. Y sabemos también que este es uno de los límites absolutos del sistema capitalista. Los campesinos siempre lo han sabido, y últimamente lo están recordando con el apoyo de tecnologías innovadoras.

Afortunadamente la preocupación por la salud ambiental es compartida por un sector creciente de los consumidores, dispuesto a pagar un sobreprecio por los productos *verdes* y sustentables, de modo que la opción de UCIRI por tecnologías no contaminantes tiene un premio en el mercado. El comercio justo y el mercado orgánico, han sido decisivos en la capacidad de la unión istmeña para sobrenadar las crisis de precios que hundieron a otros proyectos asociativos. Y en este camino ha marchado junto a la chia paneca Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla (ISMAM), organización de indios mam que nace en 1985, alentada por la Diócesis de Tapachula, que también

accede a mercados alternativos y tecnologías ecológicas, y que hoy comercializa su propia marca de café tostado y molido.

ISMAM y UCIRI son excelentes ejemplos de cómo en pocos años se remonta la estrechez local y la visión campesina se mundializa. “Algunos de nosotros -dice un folleto de la Unión- perdimos el miedo de ir a la ciudad y otros aprendieron a usar el teléfono... Antes las únicas máquinas que habíamos usado eran pequeños molinos manuales y la mayoría nunca había estado en una ciudad grande”.

Sintomáticamente, UCIRI es vinculada en falso con el EZLN, y en marzo de 1994 el ejército irrumpe en la escuela de agricultura de la unión, supuesto centro de adiestramiento militar. La acusación es calumniosa, pero la relación profunda existe, pues la preocupación de los istmeños es la producción y la equidad, pero también las reivindicaciones indígenas: “No luchamos sólo por mejorar el precio... del café -proclaman las Reglas Básicas de UCIRI, publicadas en 1986- Sabemos muy bien que la felicidad y la libertad no se pueden comprar y tampoco están en venta... Queremos mantener nuestro orgullo como habitantes ancestrales de nuestra región, con nuestra lengua, con nuestras costumbres buenas.”

La Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca (CEPCO), una red o federación que agrupa a unas 40 organizaciones regionales de la entidad y da servicio e identidad a más de 23 mil pequeños productores, es con mucho el agrupamiento cafetalero estatal más extenso del país y al lado de UCIRI e ISMAM, uno de los más exitosos.

CEPCO nace en 1988 y junto con CNOOC, que se forma ese mismo año, es hija del fin del sistema de cuotas, de la crisis cafetalera y de las negociaciones que pretenden amainarla. Richard Zinder ha dicho que en Oaxaca se impone un “neoliberalismo negociado” a diferencia de otros estados donde el ramalazo es inmisericorde. Tiene razón, gracias a la intensa movilización de las organizaciones locales, el gobierno de la entidad favorece una aterrizaje suave, que le permite a CEPCO y otras organizaciones agrupadas en el Consejo Estatal del Café, un organismo plural y razonablemente bien avenido, sustituir paulatinamente al Instituto en la entrega de anticipos, el acopio y beneficio y la comercialización.

En junio de 1990, con un año de vida, CEPCO realiza una asamblea con 1500 delegados, en representación de unos 18 mil adherentes, y en agosto lleva a cabo su primer congreso, cuyo principal acuerdo es impulsar el autofinanciamiento para el acopio y comercialización. Se forma para ello la Comercializadora Agropecuaria del Estado de Oaxaca (CAEO), que consigue un crédito de Banrural e incursiona en el mercado externo con el apoyo solidario de UCIRI. Para 1993 la coordinadora ya maneja dos plantas de beneficiado en seco, de las transferidas por Inmecafé, y para 1995 comienza a operar la Unión de Crédito Estatal de Productores de Café de Oaxaca (UCEPCO),

que además de su propia operación habilita a organizaciones hermanas, miembros de grama gubernamental de Alianza Café le corresponde el 40% del productores dCNOOC, como la chiapaneca Majomut y la poblana Tosepan Titataniski.

Para 1996 CEPCO tiene 22 mil afiliados y en el censo del proe la entidad. El autodiagnóstico de la coordinadora ese mismo año es revelador: “La reacción lógica ante la caída de los precios... fue abandonar las plantaciones y dedicarse a otras alternativas como el cultivo de básicos y la ganadería, la emigración a las ciudades y la explotación forestal... no nos preocupamos por hacer más rentable la cafeticultura; nuestra principal preocupación era como sobrevivir... Los productores no hacían los trabajos y destinaban los apoyos, raquícos por cierto, para adquirir alimentos...” Sin embargo “...era necesario hacer mas rentable la cafeticultura...” mediante renovación técnica e integración vertical. Pero también era indispensable diversificar la producción “...como una forma de obtener recursos que nos dejó de dar el café”. Así, desde el ciclo 1993-94 la coordinadora inicia el programa de café orgánico, pero al mismo tiempo busca multiplicar las actividades productivas distintas al cultivo del grano aromático.

El sujeto de las políticas locales de diversificación es la economía campesina, pero en particular el programa va dirigido a las mujeres, que siendo reconocidas por la organización como cafetaleras, son también las principales impulsoras de otras actividades. En 1995 CEPCO realiza el Primer Encuentro de Mujeres Cafetaleras, donde se afirma: “Somos socias con plenos derechos, de cada organización y de CEPCO... Pero además, como tenemos proyectos propios de las mujeres, y la necesidad de discutirlos, tenemos una Directiva de Mujeres”. Planteamiento que al admitir que si hay una doble jornada puede haber una doble militancia, reconoce los intereses específicos del género sin crear un *ghetto* femenino. “Ya tenemos más proyectos, los maridos ya nos dejan salir, pasamos de proyectos de animales a otros como abasto, farmacias, panaderías, lombricomposta”. Y también hay otros de viveros, cultivo de flores, producción de traspatio y huerto familiar, apiarios, producción de hongos.... Disponen, además, de la cooperativa *Ita-Teku*, con viveros e invernaderos, e incluso un laboratorio de biotecnología y una granja integral, que operan como centro de capacitación. Para impulsar una diversidad productiva que cada vez adquiere mas importancia económica, CEPCO estableció un Sistema de Microcrédito para Mujeres, con recursos del Banco Interamericano para el Desarrollo.

En la misma línea de no apostar todo al café y generar empleos e ingresos de otros orígenes, en 1997 la coordinadora establece una lavandería industrial para mezclilla y una fábrica de ropa, con la idea de abarcar desde el corte y confección hasta el lavado y los acabados. En estos proyectos, acuerpados en la figura Empresas Campesinas de Oaxaca, CEPCO ha trabajado junto, los otros rno núcleos liderados por PP le escatiman una solidaridad que podía poner en riesgo la

Unión de Crédito y en general la relación con el Estado. “La economía se convirtió en la clave de la unión UCIRI. Y pese a la experiencia empresarial que entre las dos acumulan, han tenido fuertes tropiezos: el cliente inicial se retiró, hay retrasos en los pagos, los cambios en la demanda dejaron subutilizada la infraestructura y es difícil competir en la confección con la muy barata mano de obra China. Por lo visto consolidar este tipo de empresas es cuesta arriba, pero la opción de empleo industrial que representan no es despreciable y sin duda es preferible la maquila social a la privada.

En el sexto congreso de CEPCO, realizado en noviembre del 2000, la coordinadora diagnosticó una dualidad en su militancia: los están ahí por que se operan programas públicos de subsidio, y eventualmente se consiguen buenos precios, y quienes tienen una participación y un compromiso mayores. Este último sector encarna principalmente en los que están involucrados en el programa de café orgánico; opción que exige disposición al cambio de hábitos productivos, trabajo intenso, beneficios posdatados y una estrecha organización a nivel de grupo y comunidad capaz de garantizar el control de calidad necesario para lograr la certificación y mantenerse en un nicho de mercado muy exigente. Sobre esta base se diseñó una estrategia que privilegia la consolidación sobre el crecimiento extensivo de la militancia, y pone el acento en la paulatina conversión a orgánicos de la mayor parte de la organización.

Con esto CEPCO trasciende por completo la visión estrecha de los años ochenta, que preconizaba la “apropiación del proceso productivo”, entendida como la incursión asociativa sobre financiamiento, beneficio y comercialización, que al desplazar a coyotes, acaparadores y usureros permitiría que los productores directos retuvieran el “excedente económico”. Y es que hoy la Coordinadora asume la tarea de apropiarse del proceso productivo pero también de revolucionarlo. Por que en una economía mercantil de nada sirve controlar la cadena económica si no se produce con eficiencia competitiva y se generan bienes de calidad reconocida por el mercado. Dicho de otra manera, si no hay excedente no se puede retener el excedente, pues aun que el trabajo individual de los campesinos sea extenuante, si en términos de valor no tiene una productividad social aceptable, simplemente no existe. Por eso la lucha de los trabajadores, y en especial de los campesinos, no es sólo contra la explotación, es decir, la expropiación del excedente, también es contra la exclusión, es decir la expropiación de las condiciones materiales para producir bienes socialmente necesarios.

El modelo de CEPCO, como el de ISMAM y UCIRI, como el de muchas otras organizaciones de pequeños productores, cafetaleros o no, se apoya en una hipótesis de trabajo, que es también una apuesta: “Se ha subestimado –dice un documento de CEPCO- las oportunidades que el desarrollo económico rural ofrece para la ampliación de los mercados laborales, como alternativa para procesos imperfectos de absorción de mano de obra rural, debido al debilitamiento de la capacidad de absorción de los centros urbanos y los procesos industriales. Es necesario

destacar, además, la importancia de la producción de alimentos como factor central de las políticas de atención a los más pobres, ya que ellos dedican la mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos y hacen de las políticas de seguridad alimentaria factores esenciales en una estrategia integral. En el sector rural se presentan ventajas, hasta ahora no contabilizadas, en las estructuras de producción para el autoconsumo... (pero además)... el 60% de unidades de producción rural, con menos de 5 has. .. ubicados en el centro-sur del país, representan el sector indígena nacional y no son agricultores de autoconsumo, como erróneamente se piensa, por el contrario muy frecuentemente... (son productores comerciales)... de café, por ejemplo”

Potenciar los usos y costumbres productivos de los campesinos, en organizaciones que son *holdings* asociativos a la vez que una suerte de comunidad de comunidades. Asumir el desdoblamiento de los bienes en mercancías, pero no la inversión y el cambio de sujeto, de modo que el valor de uso siga imperando sobre el de cambio. Crear aparatos económicos eficientes y competitivos cuyos administradores manejen con prestancia las mañas empresariales pero pongan siempre por delante los objetivos sociales y la calidad de vida de sus agremiados. Este es el sueño guajiro de los huerteros indígenas, la utopía posible que las organizaciones cafetaleras vienen haciendo a mano. Y es también el paradigma de un proyecto para el Sur digno de ser impulsado.

VI.- La selva de los senderos que se bifurcan... y se reencuentran

La Convención Nacional Democrática puede y debe marchar por dos caminos, que son complementarios: la lucha cívica por la democracia política y la lucha reivindicativa por la justicia social y la equidad económica. Estos dos frentes no son sino facetas de un mismo combate por una nueva sociedad, y lejos de excluirse se complementan.

Los desafíos de la CND. Presidencia colectiva, noviembre de 1994.

“También por el café se desangra Chiapas -escribe el subcomandante Marcos-. El 35% de la producción nacional de café sale de estas tierras que emplean a 87 mil personas. El 47% de la producción va al mercado nacional y el 53% se comercializa en el extranjero, principalmente en EEUU y Europa. Más de 100 mil toneladas de café salen del estado para engordar las cuentas bancarias de la bestia: en 1988 el café pergamino se vendió en el extranjero a un precio de 8 mil pesos, pero al productor chiapaneco se lo pagaron a 2 500 o menos”. Fechado el 27 de enero de 1994, *El sureste en dos vientos, una tormenta y una profecía*, documenta la importancia que tiene la

problemática del grano aromático para el EZLN y sus bases de apoyo. Y es que la caída de los precios del café es el trasfondo de todos los momentos de ascenso del movimiento popular en la región.

La baja de las cotizaciones cafetaleras subyace tras el Congreso Indígena de 1974, no sólo por sus repercusiones sobre los pequeños productores del Norte de la entidad, sino también por la caída de salarios y desplazamiento de jornaleros locales, que resulta de la contratación por parte de los finqueros de la más barata mano de obra guatemalteca. Así el café es un tema fundamental del encuentro. Dicen los tojolabales: “No tenemos oportunidad de que nos favorezcan con los precios de garantía del Inmecafé, porque compra a los acaparadores y no a nosotros”. Y los choles denuncian: “El Instituto está amañado con los acaparadores. A nosotros nos dice que nuestro café no está bueno y que no puede comprar. El acaparador sí nos lo compra a un precio inferior al de garantía. Por la tarde ese mismo café que nos rechazó el Instituto lo compra al acaparador”

De las corrientes organizativas que nacen del congreso, la que levanta la problemática económica de los pequeños productores tiene su eje en el café, de modo que en 1979 cuando se presenta uno más de los descensos cíclicos de las cotizaciones, se forma una Comisión Coordinadora, que exige los pagos atrasados al Instituto y demanda que este se haga cargo del transporte del grano. Al año siguiente, con base en el éxito del movimiento, las uniones de ejidos Quiptik ta Lecubtesel, de Ocosingo, así como Tierra y Libertad y Lucha Campesina, de Margaritas, y otros núcleos menores, forman la Unión de Uniones Ejidales y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas, que agrupa a unas 12 mil familias de 180 comunidades y 11 municipios. Para 1982, estas mismas fuerzas impulsan la fundación de la Unión de Crédito Pajal, proceso en el que se dividen y que ocasiona el cambio de nombre de la coordinadora que desde entonces se llama Unión de Uniones Ejidales y Sociedades Campesinas de Producción de Chiapas.

Política Popular (PP), la corriente ideológica que anima este proceso organizativo, antepone la gestión económica a toda consideración de principios y privilegia sus contactos con funcionarios públicos a otros criterios sociales, de modo que cuando la Quiptik sufre la agresión de grupos de la CNC apoyados por el gobieanipulación política”, escribe Neil Harvey, quien siguió de cerca el proceso. Y efectivamente, a la presunta liberación librecambista de los campesinos a través de la gestión de fuertes aparatos económicos, se subordina no sólo la independencia respecto del gobierno, también la simple solidaridad con quienes están sufriendo sus agresiones. Así, en medio de fuertes divisiones, se forma la Asociación Regional de Interés Colectivo Unión de Uniones, que será el principal interlocutor del gobierno federal en la Selva Lacandona, y una de las organizaciones rurales predilectas de Carlos Salinas. Pero, mientras los dirigentes y asesores de la ARIC se llevan de piquete de ombligo con el presidente de la república, desayunan con el entonces

poderoso Manuel Camacho y organizan reuniones del General Absalón Castellanos con funcionarios federales, para que los del centro le doblen las manitas al gobernador, en La Selva y Las Cañadas la fuerza pública desaloja comunidades y reprime sin misericordia. Además, a principios de los ochenta caen de nueva cuenta los precios del café.

Entre tanto, sigilosamente, otra red se está tejiendo en La Selva. Una organización que, como todas, se apoya en el trabajo que los catequistas de la Diócesis de San Cristóbal habían desarrollado entre los migrantes de las Cañadas, y también en la experiencia adquirida durante una década de movilización económica en uniones de ejidos. Pero los activistas de ideas radicales que en 1984 llegan al Desierto de la Soledad, tienen a su favor el descontento creciente de una joven generación que se había desplazado a Las Cañadas en busca de oportunidades y a la que se le cierran todas las puertas: la ganadería extensiva no es viable, desde 1989 hay veda forestal y el café se desvaloriza reiteradamente. Una generación que, gracias al éxodo, había renovado sus usos comunitarios en un sentido democrático y que en menos de diez años pasó de la ilusión en las uniones de ejidos al desencanto. Una generación acosada por la represión de la fuerza pública y las guardias blancas privadas. Una joven generación quizá más abierta y avispada que las anteriores, pero también más arisca y escamada.

En 1989 se da a conocer la Alianza Campesina Independiente Emiliano Zapata, que en 1992 se transforma en Alianza Nacional con los mismos apellidos. Pero esta no es más que la parte visible de lo que será el nuevo zapatismo. En la sombra se está construyendo también una organización clandestina y se va forjando un grupo armado, entre guerrilla convencional y ejército de indios. La fuerza que en 1994 aparecerá como EZLN, surge en el contexto de la descomposición política y moral de las organizaciones gestoras más gobiernistas y se consolida en el marco de la derrota de la ilusoria emancipación librecambista, dramatizada por la gran crisis cafetalera de 1989-93, el fin del sistema de cuotas y el desmantelamiento del Instituto. Si infancia es destino, hay que admitir que el EZLN y su militancia nacen vacunados del desvergonzado regateo económico como presunta opción liberadora. Y si desde pequeños los zapatistas desconfían de las dirigencias “concertadoras”, la experiencia ulterior ratifica sus convicciones, pues en el seno del Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas, que se forma en Chiapas a raíz del alzamiento, la ARIC Unión de Uniones, apoyada por Solidaridad Campesino Magisterial (Socama) y por la CNC, se erigen en adalides de las posiciones gobiernistas, confrontan a los agrupamientos independientes como OCEZ, CIOAC y Xi Nich, y finalmente dividen al efímero Consejo, ganándose a pulso los calificativos de “corruptos y gobiernistas”, que les endilgan los zapatistas. Más adelante, el EZLN y sus bases de apoyo tendrán que enfrentar a los asesinos paramilitares armados por el gobierno y respaldados por organizaciones clientelares como Socama, al

desarrollismo contrainsurgente del Plan Cañadas operado por Sedesol y al sistemático maiceo gubernamental de los grupos y organizaciones más o menos veleidosos.

Tiene razón, pues, el EZLN al poner la buena política por encima del regateo económico, al privilegiar la conquista y el ejercicio de las libertades sobre la rebatinga por recursos gubernamentales. Pero esto no significa que todas las experiencias campesinas autogestionarias sean políticamente deleznable. La propia ARIC Unión de Uniones se dividió, y deslindándose del antizapatismo de los asesores y parte de la directiva, un grupo mayoritario asumió una posición independiente y crítica del gobierno y de sus políticas contrainsurgentes. Pero, además, hay en Chiapas otras organizaciones de productores ampliamente rescatables. La Unión de Ejidos y Comunidades de Cafecultores, Majomut, integrada por tzeltales y tzotziles de Los Altos, se formó en 1981 y desarrolló una experiencia interesante y exitosa hasta que por su cercanía con el zapatismo, fue agredida por grupos paramilitares y por el ejército, quienes destruyeron su vivero y forzaron el desplazamiento de 340 familias. Actualmente Majomut se está reactivando y en los últimos ciclos de nueva cuenta exportó café. La Unión de Ejidos de la Selva, integrada en 1983 en Margaritas, aun que formó parte de la ARIC, ha logrado sobrevivir a su debacle política, y habiendo adoptado el modelo tecnológico de la oaxaqueña UCIRI, a partir de 1989 produce y exporta café orgánico. La ya mencionada ISMAM, desde su nacimiento en 1985 impulsa la producción ecológica y desde 1987 vende al mercado externo, pero además ha promovido por toda la entidad el café orgánico, anima la Federación Indígena Ecológica de Chiapas y es fundadora de la Asociación Mexicana de Agricultores Ecológicos. Gracias a su ejemplo la mayor parte de las organizaciones cafetaleras chiapanecas del sector social, como la Sociedad de Solidaridad Social *Timelonlá Nich K'lum* de Palenque, Salto del Agua y Tumbalá; la Unión de Cooperativas *Tzotzilotic-tzobolotic* y *Cholom B'ala*, separada en 1992 de la Unión de Uniones y con fuerte participación femenina; la Unión de Ejidos de San Fernando, de Los Altos; la Unión Regional de Ejidatarios, Agropecuaria, Forestal y de Agroindustrias de los Pueblos Zoques y Tzotziles de Chiapas, vinculada a la CIOAC; la Unión de Ejidos Otilio Montaña, de Motozintla, asociada hasta hace poco a la nada recomendable Socama, y otras agrupaciones menores, impulsan programas de café ecológico, haciendo de la entidad uno de los mayores estados productores de grano orgánico.

El EZLN y sus bases de apoyo han pasado los últimos años sometidos a un cerco político-militar y practicando una suerte de economía de guerra. Esta situación tiene que cambiar. Para ello es necesario enderezar con claras señales los entuertos generados durante la presidencia de Ernesto Zedillo, de modo que las negociaciones de paz se reanuden y finalmente el zapatismo y sus comunidades puedan insertarse con plenos derechos en la vida política nacional. Cuando esto suceda el EZLN tendrá, si así lo decide, la posibilidad de constituirse en una *sui generis*

organización política, mientras que sus comunidades transitarán de bases de apoyo de un ejército a grupos sociales urgidos de practicar con más desahogo su autonomía. Y sin duda la ejercerán gobernándose libremente, pero también impulsando sus propios programas de desarrollo. Entonces, cuando la autonomía política y la autogestión económica se engarcan de nuevo, el zapatismo de base tendrá que reencontrar la organización productiva formal de la que hace mucho se apartó.

En cuanto al amplio movimiento indígena por la autonomía, la alta probabilidad de que la incorporación plena a la Constitución de los derechos de los pueblos originarios se posponga por un buen rato, coloca al CNI en la tesitura de su segundo Congreso, cuando se planteó como tarea prioritaria reconstituir los sujetos sociales indígenas y ejercer en la práctica las formas de autogobierno. Y una parte de esta reconstitución y este ejercicio, tienen que ver con el desarrollo de las regiones, con los servicios sociales, con la producción y el ingreso, es decir con la autogestión en el ámbito de la economía. Trajín que las organizaciones indígenas nunca han abandonado y que en muchos casos es eje medular de su existencia, pero que en los últimos años fue opacado por la cuestión de los derechos autonómicos, no sólo por que esta es una reivindicación fundamental, sino también por su eficacia para unir fuerzas y movilizar conjuntamente y a escala nacional. No estoy diciendo, como algunos políticos norteados, que pasada la calentura de los derechos a los indios les ha llegado la hora de los frijoles. Afirmino, si, que en los próximos meses, junto a la estrategia para alcanzar el reconocimiento de sus derechos los indios, los campesinos y en general los mexicanos rasos, tendremos que diseñar estrategias nacionales que permitan resistir planes como el Sur-Sureste y apunten a un desarrollo justiciero e incluyente. Y en esta tarea la experiencia de los cafetaleros será paradigmática.

En los últimos veinte años los indios hicieron aportaciones decisivas a la cultura política nacional. Por una parte su lucha por los derechos autonómicos puso a la nación toda en la tesitura de un sistema de gobierno realmente democrático, participativo y plural, donde los indios y todos los mexicanos ejerzan responsablemente su autodeterminación. Por otra su combate por la organización autogestiva de la vida económica, particularmente vistoso en el sector cafetalero, es ejemplo de resistencia a las políticas neoliberales pero también paradigma de economía moral, de modernidad alternativa.

Para que estas dos aportaciones se entreveren en un proyecto libertador y justiciero unitario, habrá que vencer algunas resistencias. En los movimientos rurales del último cuarto de siglo se han definido dos grandes tendencias: una recupera la bandera del zapatismo histórico y si primero reclama la tierra con métodos de acción directa, luego reivindica el derecho político al autogobierno; la otra prolonga la experiencia del cooperativismo agrario cardenista y promueve la apropiación campesina de la vida económica. Aun que las dos vertientes han vivido tiempos de

diálogo y momentos confrontación, por lo general la primera encontró cerradas las puertas del gobierno, mientras que la segunda dispuso de espacios de negociación, sobre todo en las administraciones neoliberales que travistieron la privatización y desregulación en “mayoría de edad” campesina. Así, mientras que la primera corriente se define como contestataria, la segunda presume de concertadora. Y no son monedita de oro, pues si la una frecuenta el acelere, el sectarismo y el radicalismo verbal, la otra prohija el oportunismo y el neocooperativismo de celular y lap-top. Pero ambas han vivido experiencias valiosas, y juntas contienen los gérmenes de un futuro habitable. un millón quinientas mil hectáreas. Así, mientras que los estados mexicanos 1997 la CNOC, la CIOAC, la UNPC de la CNC, la CMPC y la UNPC afiliada a la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, se reúnen en un Foro de las Organizaciones Nacionales que trata de fortalecer la posición de los productores, tanto sociales como privados, frente al peso excesivo que en el Consejo Mexicano del Café tienen los grandes exportadores, los industriales y los gobiernos estatales y de la federación. Con la caída de los precios, el Foro cobra fuerza, unificado en la demanda de nuevos programas emergentes, pero también de una verdadera política cafetalera de largo plazo. Lineamiento estratégico que debe incluir mecanismos de estabilización de precios, por que si bien en el último cuarto de siglo la media de las cotizaciones hace del aromático un cultivo remunerativo, las fluctuaciones de hasta un 300% de la última década son de plano inmanejables. Así, el 15 de marzo del 2000 los cafecultores se movilizan de nuevo a escala nacional. Para negociar con las secretarías de Agricultura y de Fomento, llegan a la ciudad de México 2 300 productores, provenientes de Oaxaca, Chiapas, Puebla, y otros estados, quienes acuerdan con la autoridades la retención de 350 mil sacos de café apoyada con recursos fiscales, y un nuevo plan emergente de apoyos directos al productor. Programa que, como el de 1994, se transforma en una acción política, pues también en el 2 000 hay elecciones federales. De este modo, pese a que los productores de café no llegan a los 300 mil, el gobierno priista reparte dinero a cerca de 500 mil personas... y de todas maneras pierde las elecciones.

Para los pequeños productores que establecieron sus huertas en los buenos tiempos de los acuerdos económicos internacionales y del Inmecafé, es ya inocultable lo sombrío del nuevo panorama. La desregulación de un mercado que hoy, como a principios del siglo veinte, controlan las transnacionales, se expresa en competencia desordenada entre los países productores, con la consecuencia de precios bajos y erráticos. Y las expectativas inmediatas no son buenas, pues en el arranque del nuevo milenio, debido principalmente a las crecientes cosechas de Asia y Oceanía, la producción rebasa el consumo en cerca de 10% y los inventarios, que se redujeron a mediados de los noventa, se incrementan de nueva cuenta, incluso en manos de los importadores y contra su lógica de compras “just in time”. Así, para muchos productores modestos, el café está dejando de

incluidos en el PPP cosechan unas 290 mil toneladas de café al año, Guatemala produce 300 mil, Honduras 185 mil, El Salvador 160, Costa Rica 150 mil, Nicaragua 92 mil y Panamá 11 mil. Y la mayor parte de los huerteros mesoamericanos son campesinos pequeños, con frecuencia indígenas. Guatemala tiene 63 mil pequeños productores de café, Honduras 45 mil, Panamá 23 mil y Nicaragua 12 mil. Además, casi todos estos modestos productores están organizados en cooperativas y han participado en organizaciones internacionales, como la Unión de Pequeños y Medianos Productores de Café de Centroamérica, México y el Caribe.

En los indios y los campesinos surianos se encuentran las experiencias y organizaciones que conforman el patrimonio libertario de nuestros pueblos. Ahí están los cimientos de una Alianza Social Panamá México, capaz de confrontar con sueños guajiros pero también con proyectos alternativos, los megaplanes del gran dinero.

México D. F. , mayo 2001

Bibliografía

Arias, Arturo. *El movimiento indígena en Guatemala 1970-1983, en Movimientos populares en Centroamérica. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Costa Rica, 1984.*

Bartra, Armando. *De viejas y nuevas reformas agrarias, en Cuadernos Agrarios, Nueva época, num. 17-18, México 1999.*

El México bárbaro. Plantaciones y monterías del sureste durante el porfiriato. El Atajo, México, 1996.

Boege, Eckart y Gilberto López y Rivas. *Los miskitos y la cuestión nacional en Nicaragua, en Movimientos populares en Centroamérica. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Costa Rica, 1984.*

Boltvinik, Julio. *Pobreza indígena. La Jornada, México, marzo 4, 2001*

Bonfil Batalla, Guillermo. *Las nuevas organizaciones indígenas (Hipótesis para la formulación de un modelo analítico), en Indianidad y descolonización en América Latina. Documentos de la Segunda Reunión de Barbados, Nueva Imagen, México 1979.*

Bulnes, Francisco. *El verdadero Díaz. Editora Nacional. México, 1960.*

Burguete, Araceli. *Autonomía indígena un camino hacia la paz, en La autonomía de los pueblos indios. Grupo parlamentario del PRD, LVI Legislatura, México 1996.*

Cabarrús, Carlos. *El Salvador: de movimiento campesino a revolución popular, en Movimientos populares en Centroamérica. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Costa Rica, 1984.*

Calvero, Bartolomé. *Multiculturalismo y monoconstitucionalismo de lengua castellana en América, en Derecho Indígena. Magdalena Gómez (coordinadora). INI, México 1997.*

Camacho, Daniel y Rafael Menjivar. *Movimientos populares en Centroamérica. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Costa Rica, 1984.*

Carpentier, Alejo. *El recurso del método. Siglo XXI, México, 1974.*

Celis, Fernando. *UPVC: del cambio de terreno al fortalecimiento de una organización democrática. En cafetaleros, la construcción de la autonomía. Cuadernos desarrollo de base, México, 1991.*

Nuevas formas de asociacionismo en la cafeticultura mexicana. Mecanoscrito, México, 1999.

Convención Nacional Democrática. Presidencia Colectiva. Los desafíos de la CND, en Chiapas num. 1. Editorial ERA, México, 1995.

Coordinadora Estatal de Organizaciones Cafetaleras. Luchando Organizados por un futuro sin pobreza. Oaxaca, México,

2000.

Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras. Primer Congreso, Oaxaca, México, 1994.

Cosío Villegas, Daniel. Lección de la barbarie. Comentario sobre México Barbaro. Problemas Agrícolas e Industriales, México, 1956.

Da Cunha, Euclides. Los sertones. UNAM, México, 1977.

Davirón, Benoit. La crisis del mercado cafetalero internacional en una perspectiva de largo plazo, Mecanoscrito, s.f.

Egea, Gabriela. UPROCAFE: una alternativa para la integración latinoamericana. En Cafetaleros, la construcción de la autonomía. Cuadernos desarrollo de base, México, 1991.

Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Documentos y comunicados, 1º enero / 8 agosto 1994. Editorial ERA, México, 1994.

García, María del Carmen y Daniel Villafuerte. Economía y sociedad, en La sociedad frente al mercado, María Tarrío y Luciano Concheiro (coordinadores), UAM.X, México 1998.

Gilly, Adolfo. La senda de la guerrilla. Por todos los caminos/ 2. Nueva Imagen, México, 1986.

Harvey, Neil. La rebelión en Chiapas. La lucha por la tierra y la democracia. Editorial ERA, México, 2000.

Hernández Cruz, Antonio. La autonomía indígena y el nuevo federalismo, en La autonomía de los pueblos indios. Grupo parlamentario del PRD, LVI Legislatura, México, 1996

Hernández Navarro, Luis. Nadando con los tiburones: la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, en Cafetaleros, la construcción de la autonomía. Cuadernos desarrollo de base, México, 1991.

Instituto Maya. Huertas indias: Oaxaca. Mécanoscrito, México, 2000.

Café en los confines: Chiapas. Mecanoscrito, México, 2000.

Cafetales del Pacífico: Guerrero. Mecanoscrito, México, 2000.

Cafetales del Atlántico: Veracruz. Mecanoscrito, México, 2000.

Estudio de gran visión: café. Mecanoscrito, México, 2000.

Jiménez, Dina. El movimiento campesino en Guatemala, 1969-1980, en Movimientos populares en Centroamérica. Facultad latinoamericana de Ciencias Sociales, Costa Rica, 1984.

Krauze, Enrique. El profeta de los indios, en Letras Libres num. 1, México, enero 1999.

Levy, Santiago, Enrique Dávila y Georgina Kessel. El sur también existe: un ensayo sobre desarrollo regional en México. Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. México, 2000.

Leyva Solano, Xochitl. Redoble por Cañadas, en Cuadernos Agrarios, nueva época, num. 8-9, México 1994.

Menjivar, Rafael, et al. El movimiento campesino en Honduras, en Movimientos populares en Centroamérica. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Costa Rica, 1984.

El movimiento campesino en Costa Rica, en Movimientos Populares en Centroamérica. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Costa Rica, 1984.

Moguel, Julio. *La Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca. En Cafetaleros, la construcción de la autonomía, Cuadernos desarrollo de base, México 1991.*

Muñoz, Juan Pablo. *Indígenas y gobiernos locales: entre la plurinacionalidad y la ciudadanía cantonal, en Ciudadanías emergentes. Experiencias democráticas de desarrollo local. Ediciones Abya-Yala, Ecuador, 1999.*

Naridel, Laure, et al. *Un café por la causa. Hacia un comercio justo. Equiteme, Madre Tierra, Comercio Justo México, México, 2000.*

Núñez, Orlando. *La economía popular asociativa y autogestionaria. CIPRES. Nicaragua, 1995.*

Paz Paredes, Lorena. *Una mirada al período de crisis de la cafecultura mexicana, en Cuadernos Agrarios, nueva época, num. 11-12, México, 1995.*

Paz Paredes, Lorena y Rosario Cobo. *Café caliente, en Crónicas del sur. Utopías campesinas en Guerrero, Armando Bartra (coordinador). Editorial ERA, México 2000.*

Pérez Arce, Francisco. *Organizar la Selva: historia de la Unión de Uniones, en Cafetaleros, la construcción de la autonomía. Cuadernos desarrollo de base, México 1991.*

Primer Congreso Indígena "Fray Bartolomé de las Casas": *Ponencia tzeltal, Ponencia tzotzil, Ponencia chol, Ponencia tojolabal, Resoluciones. Mecanoscritos, México, 1974.*

Renard, María Cristina. *Los intersticios de la globalización. Un label (Max Habelaar) para los pequeños productores de café. CMCA, México, 1999.*

Rivera, Roy. *Política y distribución de tierras en Costa Rica. Editorial Aslma Mateer. Costa Rica, 1987.*

Rojas, Carlos. *Iniciativa del Sur, Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Senado de la República. México 2000.*

Sarmiento, Sergio. *El movimiento indio y la irrupción india Chiapaneca, en Cuadernos Agrarios, nueva época, num. 8-9, México 1994.*

Semarnat. *Plan Puebla-Panamá. Propuesta de Proyectos para la Región. México, 2001.*

Serra, Luis. *El movimiento campesino. Su participación política durante la revolución sandinista 1979-89. Universidad Centroamericana. Nicaragua, 1991.*

Sin autor. *Plan Puebla-Panamá, Documento Base. México 2001.*

Stavenhagen, Rodolfo. *El marco internacional del derecho indígena, en Derecho Indígena. Magdalena Gómez (coordinadora). INI, México, 1997.*

Las organizaciones indígenas: actores emergentes en América Latina, en La sociedad frente al mercado. María Tarrío y Luciano Concheiro (coordinadores). UAM.X, 1998.

Tamés, Pablo. *Guatemala. En la hoguera del racismo. En Hojarasca num. 26, La Jornada, México, junio 1999.*

Toledo, Carlos y Armando Bartra (coordinadores). *Del círculo vicioso al círculo virtuoso. Cinco miradas al desarrollo regional sustentable de las regiones marginadas. Plaza y Valdés. México, 2000.*

Toledo, Víctor Manuel. *La paz en Chiapas, ecología, luchas indígenas y modernidad alternativa. Ediciones Quinto Sol, México 2000.*

Thompson, Edward. Tradición, revuelta y conciencia de clase. Editorial Crítica. España, 1979.

Varios autores. Indianidad y descolonización en América Latina. Documentos de la Segunda Reunión de Barbados. Nueva Imagen, México, 1979.

Velasco, Edur y Richard Roman. Migraciones, mercados laborales y pobreza en el septentrión mexicano. En Chiapas num. 6 Editorial ERA, México, 1998.

Vera Herrera, Ramón. (entrevistador). Esta lucha, se las recomendamos, en Hojarasca, num. 48, México, abril 2001

Rupturas en el presente perpetuo, en No traigo cash. México visto por abajo. Editorial del EZLN. México, 2001.

Villamar, Alejandro. Plan Puebla-Panamá: extensión y profundización estrategia regional neoliberal, o nueva estrategia de desarrollo regional sustentable desde las comunidades.

Mecanoscrito.

Viqueira, Juan Pedro. Los peligros del Chiapas imaginario, en Letras Libres num. 1, México, enero 1999.

Warman, Arturo y Arturo Argueta.(coordinadores). Movimientos indígenas contemporáneos en México. UNAM, México, 1993.

Zarco, Francisco. Congreso extraordinario constituyente 1856-1857. Colegio de México. México, 1957.